

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO

MENCIÓN

DERECHO PENAL

***"La Aplicación Excesiva de la Prisión Preventiva y sus Consecuencias
Jurídicas en los Juzgados Penales de Chiclayo".***

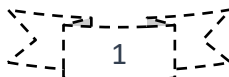
**TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES.**

AUTOR : Abog. LUIS JESUS MECHAN GONZALES.

ASESOR : Mg. RICARDO PONTE DURANGO.

Lambayeque-Abril del 2018

Reg. N°: _____



Abog. LUIS JESUS MECHAN GONZALES

TESISTA

Mg. RICARDO PONTE DURANDO

ASESOR

Presentada a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque, para optar el Grado Académico de **MAESTRO EN DERECHO CON MENCION EN CIENCIAS PENALES.**

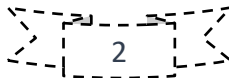
Aprobada por:

Dr. JOSE MARIA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE

Dr. RAFAEL HERNANDEZ CANELO
SECRETARIO

Dr. FREDDY WIDMAR HERNANDEZ RENGIFO
VOCAL

Lambayeque, Abril del 2018



DEDICATORIA

A mis hijos y a mi esposa, por ser
el motivo y la felicidad que día a
día me inculcan a seguir adelante,
esforzándome en la ardua carrera
profesional del Derecho.

AGRADECIMIENTO

A Dios y a mis padres, que siempre me apoyaron y que a través de su empuje, esfuerzo y sabios consejos, pude cumplir mi meta de ser un profesional de éxito, para ellos va todo mi agradecimiento.

INDICE



Dedicatoria.....	3
Agradecimiento.....	4
Resumen.....	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11
CAPITULO I.....REALIDAD PROBLEMÁTICA	14
1.1 Ubicación	15
1.2. Como surge el problema.....	15
1.3. Como se manifiesta y características.....	17
1.4. Metodología empleada.....	20
1.4.1. Problema.....	20
1.4.2. Hipótesis.....	20
1.4.3. Objetivos.....	20
1.4.3.1. Objetivo General.....	20
1.4.4. Material y Métodos.....	21
1.4.4.1. Población y muestra.....	21
Población Universal.....	21
Población Muestral.....	21
1.4.4.2. Métodos y técnicos	21
1.4.4.2.1 Métodos.....	21
Método Analítico.....	21
Método Sintético.....	22
Método Inductivo.....	22
Método Deductivo.....	22
Método Estadístico	23
1.4.4.2.2. Técnicas.....	23
Técnica de Muestreo.....	23
Técnica para recolectar información.....	23
Técnica Procesa. y análisis de datos.....	23
Técnica de la encuesta.....	23
1.4.5. Variables.....	24
1.4.5.1. Variables Independientes.....	24
Indicadores.....	24
1.4.5.2. Variables dependientes.....	24
Indicadores.....	24
CAPITULO II...LA PRISION PREVENTIVA Y SU EXCESIVA APLICACION.	25

2.1.	Marco teórico.....	26
2.1.1.	La Prisión Preventiva.....	26
2.1.1.1.	Historia.....	26
2.1.1.2.	Definición.....	27
2.2.	Medidas de Coerción.....	34
2.2.1.	Definición.....	34
2.2.2.	Principios que rigen a las Medidas Cautelares.....	35
2.2.2.1.	Principio de Necesidad.....	35
2.2.2.2.	Principio de Legalidad.....	35
2.2.2.3.	Principio de Proporcionalidad.....	36
2.2.2.4.	Principio de Provisionalidad.....	36
2.2.2.5.	Principio de Prueba Suficiente.....	37
2.2.3.	Presupuestos de las Medidas Cautelares.....	37
2.2.3.2.	El Periculum In Mora.....	37
2.2.4.	Presupuestos de la Prisión Preventiva.....	38
a)	Que, existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.....	38
b)	Que, la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad.....	41
c)	Que, el imputado en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (Peligro de Fuga) u obstaculizar la averiguación de la Verdad (Peligro de obstaculización).....	41
•	Peligro de Fuga.....	42
•	Peligro de Entorpecimiento (Obstaculización).....	42
2.2.5.	Audiencia y Resolución de la Prisión Preventiva.....	44
2.2.6.	La Duración de la Prisión Preventiva.....	46
2.2.7.	Computo del plazo de la Prisión Preventiva.....	48
2.2.8.	La Impugnación de la Prisión Preventiva.....	49
2.2.9.	Cesación de la Prisión Preventiva.....	50
2.3.	Diferencias con Detención.....	52
2.3.1.	Características del Mandado de Detención.....	53
2.4.	Naturaleza y Finalidad de la Prisión Preventiva.....	53
2.4.1.	Fumus Delicti Comissi.....	53
2.4.2.	Periculum In More.....	55

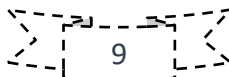
2.5. La Prisión Preventiva y la Presunción de Inocencia en el NCPP.....	58
2.5.1. La Presunción de Inocencia en el NCPP.....	58
2.5.2. Finalidad de la Prisión Preventiva.....	60
2.5.3. La Prisión Preventiva ¿Regla ó Excepción)	62
2.6. Pronunciamiento de la CIDH sobre el mal uso de la Prisión Preventiva	64
CAPITULO III.....	66
3.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	66
3.1.1. Cuadro estadístico de Requerimientos de Prisiones Preventivas Del Distrito Fiscal de Lambayeque.....	67
Análisis.....	67
Cuadro 01.....	67
3.1.2. Población Penal en el Centro Penitenciario de Chiclayo.....	69
Población Penal por situación Jurídica y Sexo.....	69
- Procesados por Prisión Preventiva.....	69
Cuadro 02.....	69
Grafico 02.....	69
- Sentenciados.....	70
Cuadro 03.....	70
Grafico 03.....	70
3.1.3. Relación de Resoluciones entre los años 2016 a 2017, que declaran fundadas las Prisiones Preventivas por parte de los Jueces Penales de los Juzgados de Investigación Preparatoria De Chiclayo.....	71
3.1.4. Encuesta realizada a los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque-Chiclayo.....	73
Gráfico 1. Análisis.....	73
Gráfico 2. Análisis.....	74
Gráfico 3. Análisis.....	75
Gráfico 4. Análisis.....	76
Gráfico 5. Análisis.....	77
3.1.5. Encuesta realizada a agentes Penitenciarios INPE-Chiclayo..	78
Gráfico 1. Análisis.....	78
Gráfico 2. Análisis.....	79
Gráfico 3. Análisis.....	80
Gráfico 4. Análisis.....	81
Gráfico 5. Análisis.....	82

Gráfico 6. Análisis.....	83
Gráfico 7. Análisis.....	84
Gráfico 8. Análisis.....	85
Gráfico 9. Análisis.....	86
3.2. Presentación del Modelo Teórico.....	87
Conclusiones.....	89
Recomendaciones.....	91
Referencias bibliográficas.....	93
Anexos.....	96

RESUMEN

Con la presente investigación lo que se ha desarrollado es un tema acuciante en el sistema carcelario y su relación con la Prisión Preventiva en los Juzgados Penales de Chiclayo, toda vez que la Prisión Preventiva es una medida cautelar de carácter personal, cuya finalidad acorde con su naturaleza, es la de garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de una futura y eventual pena futura a imponerse. No podría asignársele a esta medida una naturaleza tal que la haga devenir como una medida de seguridad o incluso en una pena anticipada, ya que sería violatoria de la Presunción de Inocencia, ello debido a que dicha medida está limitada por reglas de legalidad, proporcionalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad. El Nuevo Código Procesal Penal aduce como presupuesto material para poder dictar mandato de Prisión Preventiva, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o de su reintegración a la misma, advirtiendo que podrá utilizar los medios que ella brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados (Art. 268-2). Dicho código constituye un apoyo referente a la enunciación de supuestos para calificar el Peligro de Fuga y el Peligro de Obstaculización, ya que en la práctica judicial no ha sido homogénea y en algunos casos fue arbitraria y subjetiva. El abuso del mandato de Prisión Preventiva, es decir, personas que, pese a que debería tener la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal a la espera de su juicio, por lo que, según las Leyes Peruanas y las Normas Internacionales, la Prisión Preventiva debe ser una medida excepcional y debe adoptarse solo cuando se juntan tres factores: el indicio de culpabilidad, una pena mayor a cuatro años y el peligro de fuga. Con respecto al número de procesados y condenados, el caso del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo-Ex Picsi, el número de procesados es mayor que el número de condenados, frente a este problema el investigador plantea algunas propuestas de solución. **EL AUTOR.**

ABSTRACT



With the present investigation, what has been developed is a pressing issue in the prison system and its relationship with the preventive prison in the courts of Chiclayo, whenever the preventive prison is a precautionary measure of a personal nature whose purpose according to its nature, is to ensure the process in its characteristic purposes and compliance with a future and eventual future penalty to prevail. Could not be assigned to this measure a nature that makes it become a security measure or even an anticipated, since it would violate the presumption of innocence because this measure is limited by rules of legality proportionality provisionality temporality and variability. The new criminal procedural code adduces as a material budget be able to issue a mandate of preventive detention, the existence of reasonable elements of conviction about the belonging of the accused a criminal organization or of its reintegration to it, warning that she could use the means that she provides to facilitate her escape or that of other accused (Art. 268°-2). Said code constitutes a support referring to the statement of assumptions to facilitate the danger of flight and the danger of hindrance, since in the judicial practice it has not been homogeneous and in some cases it was arbitrary and subjective. The abuse of the mandate of preventive detention, is to say, people who despite the fact that they should have the presumption of innocence have been sent to a prison awaiting trial, therefore, according to Peruvian laws and International standards, preventive detention must be an exceptional measure and must be adopted only when three factors: together indicate the guilt, a penalty greater than four years and the risk of escape. Regarding the number of defendants and sentenced, the case of the prison facility of Chiclayo-Ex Pisci, the number of defendants is greater than the number of convicted in front of problem the researcher proposes some solutions. **THE AUTHOR.**

INTRODUCCION

La presente investigación que se haya plasmada en la presente tesis, analiza el problema de la Prisión Preventiva y su excesiva aplicación en los Juzgados de Chiclayo, de los datos que son materia de análisis se indica qu en el Perú, el 51% de la población penitenciaria se encuentra recluida en situación de Prisión Preventiva y según los datos de INPE, de un promedio de 11 mil reos que salen de la cárcel por diversos motivos, unos 8 mil lo hacen debido a que cambia su situación a comparecencia, en su mayoría se ha demostrado que estas personas están menos de un año en la cárcel, siendo así existe gente nunca debió entrar, por lo que la Prisión Preventiva se dio de manera apresurada, gastando recursos del Estado, contribuyendo al hacinamiento y se afectó los derechos de las personas y la de su Familia. Tenemos una sobrepoblación de reos 124%, de lo que concluye que casi 40 mil internos no tienen cupo en las cárceles peruanas, de lo que se concluye que el Perú es uno de los países con mayor hacinamiento, un promedio de que, en lugar de ingresar un interno en una celda del Penal de Chiclayo, ingresan entre 7 a 8 personas, y según referencias del mismo INPE la población penitenciaria creció hasta en un 9%. Se entiende que la Prisión Preventiva constituye una medida cautelar de carácter netamente personal, tiene como finalidad garantizar el proceso con fines característicos y el cumplimiento de la futura o eventual pena a imponerse, no se le puede asignar a esta medida una naturaleza que la haga devenir como una pena anticipada, ya que se estaría violando la Presunción de Inocencia, la cual está regida por reglas de legalidad, proporcionalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad.

La Prisión Preventiva corresponde al mandato de detención del Código Procesal Penal de 1991 y los presupuestos materiales para dictarla son similares (Art. 268°-1), cuerpo de leyes que añade que, para dictar mandato de

Prisión Preventiva, debe existir razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado en una organización delictiva o reintegración a la misma, o se advierta medios para facilitar la fuga o la de otros imputados. Constituye un aporte en cuanto a la enunciación para calificar el Peligro de Fuga y el Peligro de Obstaculización, siendo estas en la práctica judicial homogénea y hasta arbitraria y subjetiva.

El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las 48 (Art-271°) horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizara la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva, la misma que se realizará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, imputado y su abogado defensor, y si en caso no tuviese será reemplazado por un defensor de oficio. Según el código existe obligatoriedad de la realización de una audiencia previa, antes de decidir el encarcelamiento de un imputado, en la cual el Fiscal solicita la medida y tanto el imputado como su defensa tienen que contradecirla.

A su vez el Nuevo Código Procesal Penal reduce los plazos de duración de la Prisión Preventiva, siendo así tratándose de procesos complejos el plazo límite es de 18 meses, dejando a salvedad de ser prolongado a solicitud del Fiscal por 09 meses más, se incorpora expresamente la posibilidad en caso de excarcelación por vencimiento del plazo límite sin sentencia, de adoptar no las diligencias judiciales, sino también la imposición de las restricciones a que se refieren los numerales 2) y 4) del Art. 288°, dentro de los cuales no se encuentra la detención domiciliaria. La finalidad de Prisión Preventiva es el aseguramiento de institutos desde una óptica sustantiva y procesal, en la primera se da la ejecución de la pena y en la segunda la realización del proceso penal, se dice que todos tenemos derecho a la Presunción de Inocencia, si esto fuera así, entonces cualquier definición sobre libertad personal del imputado deberá ser en sentencia, ya que si no nos encontraríamos ante una suerte de

pena anticipada. De acuerdo a los estándares internacionales, la política penitenciaria del país debe ser parte de una política criminal global, enfocada primordialmente en prevención delictiva, entre ellos, el rol del Poder Judicial es importante en cuanto se refiere a la calificación de los presuntos autores de un delito. El tema de la política criminal tiene que ser un tema de Estado, es necesario y fundamental contar con un plan coherente, sostenido con metas claras y mensurables, para lograr una reforma penitenciaria seria y profunda, como lo requiere la actual crisis que encara nuestro sistema penitenciario.

CAPÍTULO I

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:

1.1. UBICACIÓN:

La presente investigación se ha realizado en los Juzgados de Investigación Preparatoria Penal- Chiclayo.

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA:

Antecedentes

LA LIBERTAD EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA EN LA CONSTITUCION DE 1993.- Todo Estado cuando hace referencia al Derecho, Estado y Sociedad, se toma en consideración a la persona humana como el eje. Siendo así un derecho que formule de espaldas a las exigencias que brotan de la dignidad humana, es un Derecho que podrá ser legal, pero es antijurídico y por ello rechazable. No cabe duda que, a partir de aquí, la dignidad humana se ha convertido en un Principio Constitucional superior que informa el entero ordenamiento constitucional legal. El jurista **CASTILLO CORDOVA**, señala; “hablar de los derechos fundamentales de la persona exige considerarla no como una realidad abstracta y a histórica, sino como una realidad que existe en el lugar concreto y en un momento histórico determinado. Los derechos fundamentales son manifestaciones de valores y principios jurídicos que vienen exigidos necesariamente por la naturaleza humana; dignidad humana, libertad e igualdad. Son valores o principios que no tienen su existencia limitada al campo moral o axiológico, de modo que la sola existencia

del hombre hace que es exigible su reconocimiento y consecuente tratamiento como ser digno, libre e igual.

FERNANDEZ SESSAREGO señala que el contenido del Art. 1º de la Constitución del 1993, es el eje sobre el cual gira la interpretación de las normas de este cuerpo legal, así como de todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico legal, siendo así la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, cabe expresar que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El Derecho pretende a través de su dimensión normativa eliminar el libre desarrollo del personal y “proyecto de vida”, es decir, de lo que la persona desea ser y hacer en su vida. SESSAREGO es de la opinión que le mencionado axioma jurídico, por su trascendencia debería ubicarse en pórtico de la normativa constitucional, a fin de poner en evidencia que la misión fundamental del Derecho es, proteger la libertad de cada persona, a fin de lograr su realización humana integral en armonía con el interés social, y para ello se debe crear aquellas condiciones sociales de justicia, solidaridad, seguridad e igualdad, que permitan el cumplimiento del “proyecto de vida” de cada cual.

El Artículo 1º de la Constitución, al enunciar que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que prescribe es el deber de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, así como de los diversos órganos del Estado, de proteger de una manera preventiva, integral y unitaria a la persona. Esta protección comprende tanto su estructura

psicomática como su libertad proyectiva, fenoménica, hecha acto, conducta, comportamiento. Es decir, el “proyecto de vida” de cada persona. La defensa y protección de la persona humana, en primer lugar, debe ser preventiva, el ordenamiento jurídico positivo debe contener normas que permitan a la persona obtener pronto eficaz protección frente a eventuales amenazas a su integridad psicosomática o a su libertad proyectiva. Es en el caso peruano de cuenta con las acciones de Habeas Corpus y la acción de Amparo, recogidas por el art. 200º de la Constitución de 1993.

1.3.- COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE:

En nuestro país, La Prisión Preventiva, es una medida excepcional, sin embargo, está siendo utilizada de manera indiscriminada, toda vez que es solicitada por el Ministerio Público en todos los delitos y otorgada por los jueces, sin hacer una aplicación rigurosa de las circunstancias que ameritan la aplicación de la prisión preventiva, esta situación ha ocasionado, que se incremente el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios de internos sin sentencia, y que muchas veces permanecen 08 meses en promedio en Prisión Preventiva, siendo posteriormente liberados, por cesación de Prisión Preventiva, Absolución, Libertad Procesal, Retiro de la Acusación Fiscal, comparecencia restringida, pena suspendida en su aplicación, al finalizar el proceso, constituyendo un fuerte impacto en la sobrepoblación penal y por ende en el incremento del hacinamiento penitenciario.

En la actualidad, el exceso en la aplicación y duración de la Prisión Preventiva, por parte de los jueces, es uno de los problemas que más nos aqueja y que lleva aparejado una cuestión de relevancia constitucional, como lo es la afectación del derecho a la libertad y al Plazo Razonable de duración de la Prisión Preventiva, específicamente contra la cual se sigue un proceso con restricción de su derecho a la libertad personal por encontrarse con mandato de detención preventiva, exigiéndose en este último caso un especial cuidado en la tramitación del proceso, exigencia que muchas veces se ve soslayada por la prioridad que da el Nuevo Código Procesal Penal al Plazo Legal, en lugar del Plazo Razonable.

La prisión preventiva, es la medida cautelar más severa y aflictiva que se impone a un imputado dado que restringe su libertad de locomoción, al ser internado en un establecimiento penitenciario, dejando en muchos casos graves secuelas (afectación psicológica, económica y social, tanto a nivel personal como familiar), por lo que, la prisión preventiva, constituye una de las figuras más polémicas en el modelo del Estado Constitucional, toda vez que cuestiona el principio de presunción de inocencia al convertirse en algunos casos en un adelanto de pena.

En la presente Tesis trataremos de mostrar la aplicación de la medida cautelar más severa y aflictiva que se aplica a un imputado en el proceso penal, La Prisión Preventiva, que genera ciertos debates en torno a su

procedencia, así como también aquellas cuestiones inherentes a su aplicación, tales como: régimen legal, garantías constitucionales y las consecuencias en los Establecimientos Penitenciarios, como es el hacinamiento Penitenciario.

La aplicación de la prisión preventiva, en el Perú no es excepcional, toda vez que es solicitada por el Ministerio Público de manera indiscriminada y aplicada por los jueces, tanto es así que, a noviembre de 2016, el 42.88%, de las personas internadas en un Establecimiento Penal se encuentran en situación Legal de Procesadas.

Las presiones sociales y mediáticas están contribuyendo, además a formar una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y la seguridad ciudadana de nuestro país, haciendo creer que existe un problema grave de inseguridad fomentado por la vigencia de una legislación penal en exceso benevolente, que además permite que las penas no lleguen a cumplirse en su totalidad.

Se recurre cada vez más a la pena de prisión efectiva, como única respuesta a la criminalidad en detrimento de otras penas alternativas más eficaces.

1.4.- METODOLOGIA EMPLEADA:

1.4.1.-Problema

La presente investigación tiene como base la siguiente formulación del problema:

¿Cuál es el criterio de los jueces penales que abusan de la aplicación de la Prisión Preventiva, realizando un castigo anticipado que deberá de resolver la Sala Superior; situación que contribuye al incremento del hacinamiento de internos en los Establecimiento Penitenciarios?

1.4.2.- Hipótesis

Si, los jueces penales practican un buen criterio en la aplicación de la prisión preventiva que es un castigo anticipado al inculpado; entonces no vulneraría el derecho constitucional a la libertad, que contribuye al hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

1.4.3.- Objetivos

Se procedió a establecer como objetivos de la investigación, los siguientes:

1.4.3.1. Objetivo General:

- Evaluar los índices de aplicación de prisión preventiva en los juzgados penales de la provincia de Chiclayo.

- Demostrar que el abuso de la aplicación de prisión preventiva contribuye al incremento del hacinamiento de internos en el Establecimiento Penitenciarios de Chiclayo.
- Demostrar y comprobar que existe carencia de criterio, en los magistrados al momento de solicitar y aplicar la prisión preventiva.

1.4.4.- MATERIAL Y METODOS

1.4.4.1- Población y Muestra

Población Universal

Juzgados de Investigación Preparatoria Penal de Chiclayo.

Poblacional Muestral

Para determinar la muestra se contó con la participación de los Agentes del Instituto Nacional Penitenciarios de Chiclayo (INPE); Resoluciones emitidas por Juzgados de Investigación Preparatoria y datos estadísticos proporcionado por Distrito Fiscal de Lambayeque respecto a requerimientos de Prisión Preventiva.

1.4.4.2.-Métodos y técnicas

1.4.4.2.1. Métodos

La metodología aplicada se determinó en base al diseño de investigación No Experimental, a través de aplicación de la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento que fueron la entrevista y el cuestionario.

MÉTODO ANALITICO. -

Método utilizado en la presente investigación, sobre todo al momento del procesamiento de toda la información recopilada a través de una variada

documentación, durante la primera etapa del proyecto, la misma que una vez seleccionada se catalogó y se extrajeron los temas más relevantes respecto de nuestra formulación del problema, hipótesis y objetivos.

METODO SINTÉTICO. -

Fue utilizado durante la elaboración de las conclusiones, las mismas que permitieron elaborar recomendaciones para dar solución al problema planteado en la investigación. También fue utilizado al momento de evaluarlos cuadros, las entrevistas y al momento de elaborar el resumen en el marco teórico.

MÉTODO INDUCTIVO. -

Método utilizado tanto en la recolección de la información, así como en la elaboración del marco teórico al establecerse las categorías jurídicas desde lo general a lo particular tomando como esencia a la normatividad, y el aspecto arbitral y de contrataciones del Estado. De igual manera, fue empleado también para el diálogo de la entrevista.

MÉTODO DEDUCTIVO. -

Este método fue empleado en la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, respecto a las conclusiones, se empleó para determinar de la manera más precisa los resultados de todo el proceso de investigación y para ser coherente con lo estudiado, y respecto a las recomendaciones a fin de proyectarse a futuro y que la propuesta presentada sea aprovechada para enriquecer el conocimiento sobre el tema bajo investigación.

MÉTODO ESTADÍSTICO. -

Utilizado para el procesamiento de tablas y gráfico.

1.4.4.2.2. Técnicas

a) Técnica de muestreo

La técnica empleada es la de muestreo de juicio o criterio del investigador en su modalidad de selección discrecional de una muestra.

b) Técnicas para recolectar información

- Material Bibliográfico.
- Normatividad vigente.
- Copias de resoluciones judiciales tramitados por los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo- Distrito Judicial del Departamento de Lambayeque.
- Datos estadísticos proporcionado por Distrito Fiscal de Lambayeque.

c) Técnica para el procesamiento y el análisis de datos

- Utilización de Procesador Sistematizado Computarizado.
- Pruebas Estadísticas.

d) La técnica de la encuesta

Utilizando como instrumento un cuestionario; recurriendo como informantes a los Fiscales Penales del Distrito Fiscal de Lambayeque y Agentes Penitenciarios del Penal de Chiclayo (INPE).

1.4.5.- VARIABLES

1.4.5.1. Variable Independiente

- Vulneración del Derecho constitucional a la libertad
- La detención preventiva en el Proceso Penal.

Indicadores:

- ✓ Principio de Legalidad
- ✓ Presunción de inocencia
- ✓ Presupuestos procesales
- ✓ Exceso de carcelería
- ✓ Prisión Preventiva

1.4.5.2.- Variables Dependientes:

- Hacinamiento carcelario.

Indicadores:

- ✓ Arraigo Procesal
- ✓ -Peligro de fuga
- ✓ -Peligro de obstaculización
- ✓ -Incremento de Internos

CAPÍTULO II

2. LA PRISION PREVENTIVA Y SU EXCESIVA APLICACION. -

2.1. MARCO TEORICO

2.1.1. PRISION PREVENTIVA

2.1.1.1. Historia

Es remoto el origen de las prisiones; sin embargo, la privación de la libertad no es una sanción antigua, en el Derecho Romano, la prisión no se estableció para castigar a los delincuentes, sino sólo para custodiar a los procesados hasta que se dictara sentencia. Así la llamada prisión preventiva se anticipó a la prisión en sentido estricto.

La Doctrina coincide en la idea de que el hombre primitivo no pensó en construir cárceles para los transgresores de sus leyes, más bien tenía la idea de vengar la ofensa de investigar las causas que influyeron en la comisión del hecho delictuoso.

Carlos García Valdez expresa que la Prisión desde la etapa preventiva, hasta finales del siglo XVI pasando por el Derecho Técnico Germánico, se ha utilizado fundamentalmente para guardar delincuentes, incluso con ulteriores fines antrofágicos, no como medio represivo en sí y ello es resultado de la concepción que sobre el delito y delincuente; el hecho sancionable es un mal, y el culpable un “perversus homo” no susceptible de enmienda sino de castigo rápido y capital. En esta situación la cárcel custodia se impone frente a la prisión entendida y aplicada como pena.

Concluye el mismo autor diciendo que históricamente la cárcel no ha sido inventada con la finalidad de reclusión, su razón originaria es la de una medida cautelar apta para asegurar la disponibilidad del reo a los fines del juicio.

2.1.1.2. Definición:

La prisión Preventiva es una privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de precaución. Se toma esta medida con el fin de garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena.

En ese sentido, y siguiendo un estricto respeto por el principio legal relativo a la presunción de inocencia, para efectos del presente trabajo esta definición de la prisión preventiva abarcará tanto a las personas detenidas e imputadas por un delito y que están a la espera de que se realice un juicio o se presente una salida alternativa como a aquellas detenidas y sentenciadas en primera instancia, pero cuyo caso está en proceso de apelación o revisión. Se excluye, evidentemente, a aquellas personas privadas de libertad que se encuentran cumpliendo condena mediante sentencia firme, así como a las personas detenidas por motivos ajenos a la investigación y sanción de un delito por la vía penal.

Esta posición se basa en, **primero**, el artículo 2 del Título Preliminar del NCPP 2004, donde se lee que: “Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante

sentencia firme debidamente motivada”. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado.

Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido.

Segundo, responde también al hecho de que, en el Perú, el proceso de apelación admite una revisión del caso tanto para cuestiones de hecho como de derecho, y se permite incluso la presentación de nuevas pruebas. Tal como afirma Talavera, “[con el NCPP 2004] se ha decidido configurar un recurso de apelación amplio, de modo tal que toda decisión final es susceptible de recurso de apelación y también se abre la posibilidad de ofrecer y practicar prueba en la vista oral, configurándose de esta manera una verdadera segunda instancia”.

A esto vale añadir que en el transcurso de la investigación se encontraron interpretaciones alternativas del alcance de los términos *prisión preventiva*, *procesado* y *condenado*. Así, por ejemplo, para el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, del Ministerio Público, “los detenidos en vía de proceso son aquellos cuyos casos han llegado a judicializarse y los sentenciados son aquellos que tienen una sentencia firme condenatoria”. De igual forma se manifestaron expertos en el tema, al señalar que “quien interpone apelación o nulidad contra sentencia condenatoria es un

condenado. La pena privativa de libertad impuesta es de inmediata ejecución aun cuando haya interpuesto uno de esos recursos”.

Finalmente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fuente de algunas de las cifras utilizadas en este trabajo, explicó que “un interno será contabilizado como procesado hasta el momento en que tenga una sentencia firme consentida y ejecutoriada. Solo cuando el Poder Judicial diga que se acabó el proceso, pasa a sentenciado”.

El Artículo 2° inciso 24 párrafo “b” de la Constitución Política del Estado señala que no se permite ningún tipo de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos en la ley; por lo tanto la ley fundamental reconoce la libertad personal como un derecho fundamental, pero al mismo tiempo consagra su carácter relativo, a legitimar su afectación por causales previstas en el marco estricto de la legalidad, una de estas restricciones es la prisión preventiva, que es esencialmente una medida cautelar de naturaleza personal, pues, recae directamente sobre la libertad del sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, cuya incidencia jurídica pretende garantizar la condena del presunto culpable. La libertad es un bien jurídico que permite la autorrealización del individuo y que posibilita su intervención en concretas actividades socioeconómicas.

Debe advertirse que la condena determinada en la sentencia es la culminación del procedimiento, la eficacia de la investigación depende del desarrollo probatorio que se pueda alcanzar mediante la intervención de los sujetos

procesales; y es *fundamental la presencia del imputado, puesto que lejos de considerarlo* un objeto de prueba, su participación es necesaria para la actuación de ciertos medios probatorios. La ausencia del imputado en algunas diligencias puede provocar la ineficacia probatoria, en consecuencia, hay excepciones en las que se hace necesaria la intervención estatal para que durante el procedimiento se asegure la actuación de ciertas pruebas que faciliten el esclarecimiento de su objeto.

La prisión provisional para (FENECH, 2007) es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la libertad individual de una persona en virtud de una resolución judicial y que tiene por objeto el ingreso de esta en un Establecimiento Penitenciario, destinado al efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena.

La prisión preventiva es una medida de coerción procesal válida, cuya legitimidad está condicionada a la concurrencia de ciertos presupuestos (formales y materiales), que debe tomar en cuenta el Juzgador al momento de decidir la medida, que se encuentran taxativamente previstos en las normas que modulan su aplicación. (PEÑA CABRERA, 2007).

La prisión preventiva se equipará a la “detención preventiva” introducida en nuestro ordenamiento legal en el Art.137° del Código Procesal penal de 1991. Es una institución jurídica que en el proceso penal significa la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena.

Ella sirve a tres objetivos:

- 1.- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal.
- 2.- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal.
- 3.- Pretende asegurar la ejecución penal.

La prisión preventiva es una medida coercitiva que tiene por objeto

asegurar a la persona del imputado a los fines del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El aseguramiento de una pena corporal, traducido en la detención judicial intenta justificar una medida preventiva que tiene su génesis en la inseguridad que genera la criminalidad para la sociedad que necesariamente se plasma en primer lugar en el imputado. Este razonado temor e inseguridad que genera la criminalidad en la sociedad aumenta en nuestro país debido a los altos índices de criminalidad que registra en la actualidad.

Toda sociedad busca su seguridad jurídica, entendida esta última como un supuesto esencial para la vida de los pueblos, el desenvolvimiento normal de los individuos e instituciones que los integran, en virtud a ella la prisión preventiva aparece como una respuesta del sistema penal frente a la potencialidad delictiva del imputado; la aplicación de dicha medida transitoriamente asegurará a la sociedad frente al presunto culpable y es admisible en cualquier estado del procedimiento. (Flores Polo, Pedro, 2002)

Las características esenciales o notas identificativas de la prisión preventiva son su provisionalidad preventiva, instrumentalidad y cautelar, sometida su aplicación al principio de jurisdiccionalidad, y para Binder, existiría un tercer principio: el de proporcionalidad: la violencia que se ejerce como medida de coerción nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de una pena, en caso de probarse el delito en cuestión.

Entre las medidas que aseguran el procedimiento, la prisión preventiva es la afectación más grave en la libertad individual; por otra parte, ello es indispensable en algunos casos para una administración de justicia penal eficiente. El principio constitucional de proporcionalidad exige restringir la medida y los límites de la prisión preventivas lo estrictamente necesario.

El derecho internacional de los derechos humanos protege extremadamente el principio de inocencia que asiste al imputado, lo que impide que se trate como culpable a la persona sospechosa de haber cometido un delito mientras no haya sido declarada judicialmente su culpabilidad, en consecuencia, los efectos de la prisión preventiva de ninguna manera pueden ser equiparados a los efectos de una pena.

Resulta completamente ilegítimo detener preventivamente a una persona con fines retributivos o preventivos propios de la pena, ahí radica la importancia de que la duración de la prisión preventiva se extienda a un tiempo razonable, puesto que al excederse de la razonabilidad temporal esta medida deviene en

arbitraria e ilegítima, por tanto, la razonabilidad temporal de la medida se fundamenta en los principios de celeridad y eficacia procesal.

Ni la función de aseguramiento de la pena corporal puede otorgar legitimidad a la intromisión estatal en la esfera de la libertad de la persona sin que exista una declaración de culpabilidad. Cualquier fundamento resulta inconsistente, ni la justificación que la detención judicial tiene por objeto “adelantar las funciones de la pena a la declaración de culpabilidad” puede legitimizar la facultad del Estado para privar la libertad a los individuos de una sociedad.

El problema se potencializa en países en que las tasas de criminalidad son altas y el sistema procesal penal no es suficiente para luchar contra ese fenómeno, como es el caso peruano, por lo que la aplicación de esta medida de seguridad resulta necesaria y la colisión de derechos libertad-seguridad son aún muy discutibles.

Justamente porque afecta un derecho fundamental, la prisión preventiva debe constituir una medida de ultima ratio, que solo debe aplicarse ante circunstancias plenamente justificadas, que deben condecirse con un estado de cosas que revele graves indicios de criminalidad, considerando al imputado renuente a someterse libremente a la coacción estatal o que manifiesta una conducta poco colaboradora para el esclarecimiento de los hechos, u obstruya la actividad probatoria.

El orden interno de un Estado se revela en el modo en que está regulada esta situación de conflicto: los estados totalitarios, bajo la antítesis errónea Estado-

ciudadano, exagerarán fácilmente la importancia del interés estatal en la realización, lo más eficaz posible, del procedimiento penal. En un estado de Derecho, en cambio, la regulación de esa situación de conflicto no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines –aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano-.

2.2 MEDIDAS DE COERSION.

2.2.1.- Definición.-

Las Medidas “Cautelares”¹ o “Coercitivas”² son restricciones de derechos personales o patrimoniales del inculpado o de terceras personas, impuestos dentro del proceso penal, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los fines del mismo, de esta manera, el Estado pone en movimiento una serie de medidas necesarias para que se cumpla con el propósito para el cual las leyes han sido creadas. Al respecto **ROSAS YATACO** refiere que las Medidas Cautelares (MC) “son todas aquellas restricciones al ejercicio de los derechos (personales o patrimoniales) del inculpado o de terceras personas, que son impuestos o adoptados en el inicio o durante el curso del proceso penal tendiente a garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la ley sustantiva en un caso concreto, así como la búsqueda de la verdad sin tropiezos”³, en consecuencia, las MC son medios para conseguir un fin procesal concreto, cierto y posible en un proceso determinado. Se actúa coercitivamente para hacer efectiva otra actividad inmediata o mediata según los casos. Dichas

medidas sólo pueden ser dictadas por el juez competente y de acuerdo a las normas legales previamente establecidas. Su función es básicamente la de aseguramiento del proceso, que está destinado a evitar el peligro de que se afecte la efectividad de una resolución judicial”⁴.

2.2.2.- PRINCIPIOS QUE RIGEN A LAS MEDIDAS CAUTELARES. -

La afectación a los derechos de la persona con la adopción de las MC debe sustentarse en determinados principios como son los siguientes:

2.2.2.1.- Principio de Necesidad.

Según este principio, **CUBAS VILLANUEVA**, señala que “las medidas coercitivas se impondrán cuando resulten absolutamente indispensables para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

2.2.2.2- Principio de Legalidad.

La Constitución Política del Perú, en el art. 2 inc 24 párrafo b), por tratarse de un derecho fundamental de la persona, como la libertad, la cual vería de acuerdo a la Medida Cautelar que se tome durante la persecución de un proceso, ha establecido las condiciones, en la cual “no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo los casos previstos en la ley”, atendiendo a este principio constitucional, no sólo debe de cumplirse con los requisitos que exige la ley para adoptar una medida cautelar, sino que su adopción se encuentre justificada, es decir, el TC en el Exp. N° 2050-2002, en el fundamento

jurídico N° 8 ha establecido que éste “principio impone tres exigencias: la existencia de una ley, que la ley sea anterior al hecho sancionado y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado.

2.2.2.3.- Principio de Proporcionalidad.

Se trata de un principio que es fruto de una elaboración doctrinaria de los tribunales regionales de la Unión Europea y de los Tribunales Constitucionales de los países de Europa, es decir, tiene sus orígenes en Europa. Para PEDRAZ PENALVA, este principio “busca proteger los derechos fundamentales de la persona, fijando los límites de la intervención del Estado en la búsqueda de un equilibrio entre los intereses generales que aquel persigue y los intereses básicos de los individuos o grupos que sólo excepcional, taxativa y fundadamente pueden ser lesionados”⁵, agrega SANCHEZ VELARDE, que las MC deben dictarse “manteniendo la proporcionalidad con los fines del proceso penal y atendiendo a las necesidades asegurativas respecto del procesado”⁶.

2.2.2.4.- Principio de Provisionalidad.

El NCPP, en el art. 255 inc. 2, señala que “*los autos que se pronuncian sobre las Medidas Cautelares son reformables, aún de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo*”. Las MC o coercitivas por su naturaleza son “provisionales”⁷, ninguna medida tiene carácter definitivo o de duración indeterminada.

2.2.2.5.- Principio de Prueba Suficiente.

Es recogido por el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en el artículo 253 inc. 2), al regular los principios de las medidas coercitivas. Para imponer cualquier medida cautelar, según **CALDERÓN SUMARRIVA Y AGUILA GRADOS**, señala que “se debe dictar las medidas sobre cierta base probatoria, es decir, que exista una razonable y fundada presunción sobre la posible responsabilidad del imputado. Cuando más grave es la medida, se requerirá mayor respaldo probatorio”⁸.

2.2.3.- PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. -

La doctrina es unánime en sostener la existencia de dos presupuestos que deben observarse en la adopción de las medidas cautelares:

2.2.3.1.- El Fumus Bonis Iuris.

Según **ORTELLS RAMOS**, “radica en la razonada atribución del hecho punible a una persona determinada; es la imputación misma de un delito o juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal del sujeto pasivo de la medida, el mismo que a de fundarse en los resultados de los actos de investigación del procedimiento preliminar o de la actividad policial previa al mismo”⁹

El presupuesto *fumus bonis iuris* o apariencia o justificación del derecho subjetivo, en el proceso penal, es la *razonada atribución del hecho punible* a una persona determinada. El presupuesto material es la *imputación*, sin ella no existe la posibilidad de adoptar medida cautelar.

2.2.3.2.- El Periculum In Mora.

A juicio de **CALAMANDREI**, “dos son los elementos de este presupuesto: a) el tiempo de demora en la expedición de la resolución final (*el retraso*); y, b) durante ese lapso de tiempo pueden realizarse acciones o acontecer hechos que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal (*daño marginal por la demora*)” ¹⁰. A su vez el “*periculum in mora*”¹¹, según puede desprenderse de lo expuesto, consta de dos notorias características: la inminencia y la irreparabilidad, que deben concurrir en el daño causado por la demora de la sentencia y que conducen a una tutela cautelar rápida o urgente

2.2.4.- PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA:

El Juez a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

a. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

Es el presupuesto del *fumus boni iuris*, que se refiere a que los primeros actos de investigación que se realizan ni bien conocida la noticia criminal deben revelar una sospecha vehemente de criminalidad, que deben advertir indicios razonables de la comisión de un delito, que puedan ser confrontadas de forma

objetiva, no bastan entonces las meras conjeturas o presunciones sin fundamento.

La apreciación de los indicios razonables de criminalidad en la fase de investigación significa la existencia de motivos razonables que permitan afirmar la posible comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida, que supongan una relación directa con el imputado, la que puede consistir en una relación de autoría, coautoría u otro grado de participación, injusto que puede ser a título de dolo o culpa. Deben concurrir varios elementos de convicción e indicios que construyan una base de cognición sólida.

La suficiencia probatoria está referida a los elementos razonables sobre la vinculación como autor o partícipe del delito. Podemos apreciar dos aspectos, uno de ellos referido al objeto de la suficiencia probatoria, que aparte de que exige una razonable fundamentación probatoria sobre la existencia del delito, también exige la vinculación del imputado con el hecho delictivo atribuido. Posiblemente en un caso concreto exista suficiencia probatoria, sobre la realización de un hecho delictivo; pero es necesario también que existan suficientes elementos probatorios respecto a la participación delictiva del procesado en ese hecho concreto. Es preciso que la suficiencia probatoria considere la participación del imputado en el hecho delictivo. (VASQUEZ VASQUEZ, 2006). individualizando de ser el caso el grado de participación de cada uno de los imputados si son varios sujetos activos, que es además

concordante con la función de seguridad que en la realidad tiene la detención judicial.

Otro aspecto de este primer requisito se refiere al estado o grado de conocimiento exigido sobre los hechos, que es el cierto grado de verisimilitud sobre la participación del imputado en el hecho, por lo que es necesario que se llegue a determinar la existencia de suficiencia probatoria en el caso concreto en atención de las circunstancias del hecho.

Los Jueces Penales para iniciar el proceso requieren únicamente de la existencia de elementos que permitan una sospecha fundada sobre la participación punible del imputado en el hecho delictivo, suponiendo que para el inicio de una relación procesal, bastará la simple imputación de la existencia del delito y la participación del imputado en el hecho; empero este grado de conocimiento sobre los hechos no bastara para constituir el presupuesto de la suficiencia probatoria, descartándose que el estado o grado de conocimiento que se tenga sobre los hechos sea el mismo que el grado de conocimiento que basta para vincular a una persona al proceso.

El grado de conocimiento exigido por el presupuesto es uno superior al requerido para iniciar el proceso; pero sin llegar al grado de certeza, de suerte que dentro de este margen pueden caber estados o grados de conocimiento como la “probabilidad” y la “duda”. Por ello Ascencio Mellado acota, que: “Debe exigirse algo más que una posibilidad y menos que la certeza (...) no basta una mera sospecha sobre la culpabilidad del imputado.

b. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y

La prisión preventiva está condicionada a la conminación legal en abstracto que se determina como consecuencia jurídica a cada tipo legal, por lo que se deberá efectuar una prognosis de pena, no basta que la pena sea mayor superior a los cuatro años, en tanto la determinación de la pena está sujeta a una serie de variables, entre estas las circunstancias concomitantes a la realización del hecho punible.

c. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Este presupuesto hace alusión al periculum in mora, es decir cuando existen indicios o evidencias razonables, de que el imputado no está dispuesto a someterse voluntariamente a la persecución penal estatal, y se advierten ciertas particularidades y características personales del imputado (reincidencia, líder, cabecilla de una banda, por ejemplo), la flagrancia, las altas posibilidades de fuga, la gravedad del delito, entre otros.

El Peligro procesal, presenta dos supuestos: La intención del imputado a sustraerse de la acción de la justicia; y la intención de perturbar la actividad probatoria. Potencialidad razonable de fuga o perturbación de la actividad probatoria.

- **Peligro de fuga:** Según apreciación de las circunstancias del caso particular existe el peligro de que el imputado no se someta al procedimiento penal ni a la ejecución, presumiéndose también de que el sujeto activo se pondrá en una situación de incapacidad procesal.

Para calificar el peligro de fuga el Juez tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo o las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, vínculos de carácter familiar, amical y de negocios, grado de influencia que pueda ejercer en determinados ámbitos socio-políticos, situación económica, lazos familiares en el exterior, de ser el caso su doble nacionalidad, etc.

Predecir la gravedad de la pena a inicios del proceso es algo muy subjetivo, puesto que las circunstancias valorativas que rodearon el proceso pueden variar en las etapas posteriores al realizarse la actividad probatoria, salvo que el procesado haya sido intervenido en flagrancia y se cuente con los elementos de juicio suficientes para formar un juicio de esta naturaleza en la etapa preliminar del procedimiento. Por lo que los primeros elementos que se recojan para adoptar la prisión preventiva, no son de ningún modo definitivos ni concluyentes, como para estimar cerradamente una sanción determinada.

-**Peligro de Entorpecimiento:** (Peligro de Obstaculización) Exige que el comportamiento del imputado funde la sospecha vehemente de que él:

- Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falseará medios de prueba.
- Influirá de manera desleal con coimputados, testigos o peritos (por tanto, no es suficiente que el imputado le pida que no declare a un testigo autorizado a abstenerse de declarar testimonialmente).
- Inducirá a otros a realizar tales comportamientos y si, por ello, existe el peligro de que él dificultara la investigación de la verdad.

El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Conducta que se manifiesta en interés de aquel para esclarecer el objeto de la investigación, no necesariamente confesando su culpabilidad, sino a partir de una participación positiva en cuanta diligencia u acto procesal que fuese llamado a intervenir por la Instancia Judicial.

Para calificar el peligro de obstaculización, conforme al Artículo 270º del Nuevo Código Procesal Penal, se tendrá en cuenta el riesgo razonable que el imputado:

Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba (Art. 270.1), en este caso, el imputado es portador de elementos de prueba importantes para acreditar la imputación delictiva.

Influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente (Art. 270.2), las maniobras más

usuales para desvirtuar una acusación de forma ilícita, es comprando testigos o peritos, esto es, corrompiendo voluntades, a fin de que se tuerza la verdad de los hechos. Claro está, que la influencia puede ser también ejercida bajo violencia o amenaza.

Inducirá a otros a realizar tales comportamientos (Art. 270º.3). La influencia hacia otros sujetos procesales, la puede ejercer el imputado de forma personal o mediando otra persona. La inducción puede ser directa o por medio de interpósita personal.

De acuerdo al artículo 268º del Nuevo Código Procesal Penal también será presupuesto material para dictar mandato de prisión preventiva, sin perjuicio de la concurrencia de los presupuestos establecidos en el mencionado artículo, la existencia de razonables elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, y sea del caso advertir que podrá utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados o para obstaculizar la averiguación de la verdad”.

2.2.5.- AUDIENCIA Y RESOLUCION DE LA PRISION PREVENTIVA.

El artículo 271º del Nuevo Código de Procedimiento prevé todo lo pertinente respecto a la Audiencia y Resolución de la Prisión Preventiva. El Juez de la Investigación Preparatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su defensor. El defensor del

imputado que no asista será reemplazado por el defensor de oficio. La necesidad de actuar, en una audiencia pública, los sustentos (en contra y a favor), que deberá tomar en cuenta el Juzgador para resolver el pedido de prisión preventiva, estas deben adoptarse con todos los elementos de juicio que sean necesarios para garantizar su legalidad. Elementos de juicio que deben ser confrontados con los principios que dinamizan el acusatorio como son los de inmediación, debate y contradicción entre las partes. Poniendo énfasis en el derecho irrestricto de defensa del imputado.

La resolución debe ser pronunciada en la audiencia sin necesidad de postergación alguna. El Fiscal y el abogado defensor serán sancionados disciplinariamente si por su causa se frustrara la audiencia. Si el imputado se niega por cualquier motivo a estar presente en la audiencia, será representado por su abogado o el defensor de oficio, según sea el caso. En este último supuesto deberá ser notificado con la resolución que se expida dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia.

El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustenta, y la invocación de las citas legales correspondientes. La motivación de la resolución es imprescindible para sujetar la medida de coerción al marco de la legalidad, exponiendo las razones que justifican la prisión preventiva, a partir de una ponderación valorativa de los intereses que se pretenden amparar, de los fines que se pretende alcanzar, así como la obligación de exponer

correlativamente la concurrencia de los presupuestos formales y materiales previstos en los Arts. 268º-267º, adecuándolos debidamente a las circunstancias que rodean el caso concreto. Todos estos puntos se comprenden en la proposición lógico-jurídica que conlleva un auto de esta naturaleza, esto es, describiendo la imputación delictiva en su consideración fáctica y en su dimensión jurídico-penal, exponiendo los fundamentos de hecho y derecho, y los dispositivos legales que correspondan (procesales y materiales). La sujeción de estas formalidades permite una adecuada tutela jurisdiccional efectiva para los justiciables.

2.2.6.- LA DURACION DE LA PRISION PREVENTIVA.

La legitimidad material (constitucional) de la prisión preventiva está condicionada a la concurrencia de presupuestos materiales (*funus bonus iuris* y *periculum in mora*), formales (jurisdiccionalidad, motivación) y que se adopte la medida bajo las reglas del principio acusatorio. Empero, la legitimidad sustancial de la prisión preventiva supone también someter su duración en el tiempo al principio de provisionalidad. Los fines de la detención preventiva son de asegurar la pretensión punitiva estatal, que se materializan a través de la condena, así como de realizar una actividad probatoria que pueda reconstruir el hecho punible tal y como aconteció en realidad.

La prisión preventiva, entonces, para no vulnerar el principio de legalidad debe durar lo estrictamente necesario para alcanzar los fines propuestos en el

proceso. Si esta rebasa el tiempo estrictamente razonable, la medida se convierte en arbitraria e inconstitucional.

El carácter provisorio de la prisión preventiva está relacionado directamente con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, es decir, el derecho que tiene todo justiciable a que su situación jurídica sea resuelta en un plazo razonable, de acuerdo a lo estipulado en los Convenios Internacionales.

El artículo 272º del Nuevo Código Procesal establece que la prisión preventiva no durará más de nueve meses, tratándose de procesos complejos el plazo límite de la prisión preventiva no durará más de dieciocho meses.

Al vencimiento del plazo sin haberse dictado sentencia de primera instancia, el Juez de oficio o a solicitud de las partes decretará la libertad del imputado, sin perjuicio de dictar concurrentemente las medidas necesarias para asegurar su presencia en diligencias judiciales. Habiendo transcurrido los plazos previstos en los artículos 272.1 y 272.2, el Juez de la causa, deberá ordenar la inmediata excarcelación del imputado, bajo responsabilidad. La orden de excarcelación puede decretarse de oficio o a solicitud del imputado y del Ministerio Público.

En estos casos, el juzgador, en el mismo auto que decreta la libertad del imputado, deberá adoptar las medidas de coerción personal que aseguren la comparecencia del procesado a la instancia, vía comparecencia con restricciones.

Por otro lado, cuando concurren circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la detención, y que el imputado pudiera sustraerse

a la acción de la justicia, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2) del Artículo 272º. El Fiscal deberá solicitarla al Juez antes de su vencimiento (Art. 274.1). La prolongación de la prisión preventiva podrá ser solicitada por el Fiscal, quien deberá motivar debidamente su pedido, en razón a los presupuestos antes mencionados.

El Juez de la Investigación Preparatoria se pronunciará previa realización de una audiencia, dentro del tercer día de presentado el requerimiento. Esta se llevará a cabo con la asistencia del Ministerio Público, del imputado y su defensor. Una vez escuchados los asistentes y a la vista de los autos, decidirá en ese mismo acto o dentro de las setenta y dos horas siguientes, bajo responsabilidad (Art. 274.2). Bajo las reglas del contradictorio y de la oralidad bilateral, el Juez deberá resolver la solicitud de prolongación de la prisión preventiva, en el mismo acto de la audiencia o dentro de las setenta y dos horas siguientes, como plazo perentorio.

La resolución que se pronuncie sobre requerimiento de prolongación de la Prisión preventiva podrá ser objeto de recurso de apelación. Una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida (Art.274.4).

2-2.7.- COMPUTO DEL PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA.

No se tendrá en cuenta para el computo de los plazos de prisión preventiva, el tiempo en que la causa sufre dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa (Art.275.1). Importa entonces, una

conducta procesal maliciosa del imputado que no puede convalidar una situación jurídica a favor de sus intereses. Debe quedar claro que las dilaciones son producto de una defensa obstruccionista, para no reconocer como válida, dilaciones exclusivamente jurisdiccionales.

El cómputo del plazo, cuando se hubiera declarado la nulidad de todo lo actuado y dispuesto se dicte un nuevo auto de prisión preventiva, no considerará el tiempo transcurrido hasta la fecha de emisión de dicha resolución (Art.275.2).

2.2.8.- LA IMPUGNACION DE LA PRISON PREVENTIVA.

Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la apelación es de tres días. El Juez de la investigación preparatoria elevara los actuados dentro de las 24 horas, bajo responsabilidad. La apelación se concede con efecto devolutivo (Art.278.1). La apelación como recurso impugnatorio ordinario, será de conocimiento de la Sala Penal Superior, pero lo resuelto en esta instancia, deberá ser devuelto al Tribunal A quo para lo que corresponda según ley.

La Sala Penal se pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las 72 horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del Defensor del imputado. La decisión debidamente motivada, se expedirá el día de la vista de la causa o dentro de las 48 horas, bajo responsabilidad (Art.278.2). La resolución que expida la Sala

Penal Superior, está condicionada a la realización de una audiencia, bajo las reglas de la oralidad y de la bilateralidad, primando a estos efectos, el principio de celeridad y economía procesal.

Si la Sala declara la nulidad del auto de prisión preventiva, ordenará que el mismo u otro Juez dicte la resolución que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el Art.271 (Art.278.3), siendo así, la Sala Superior no podrá actuar como un Tribunal de instancia, al limitarse su competencia a la declaratoria de nulidad. Situación que no se condice con el principio de economía procesal, pues, si el Tribunal advierte ciertos defectos o vulneraciones a la legalidad procesal debería en ese mismo acto, aplicar el derecho que corresponda revocando el auto de prisión preventiva, y ordenando en ese mismo extremo, la libertad del imputado.

2.2.9.- CESACION DE LA PRISION PREVENTIVA.

La duración de la prisión preventiva está limitada a un tiempo prudencial y razonable. El imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que la considera pertinente. El Juez de la Investigación preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el Art.274º respecto a la prolongación de la prisión preventiva.

La cesación de la medida procederá, cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de

comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el Juez tendrá en consideración, adicionalmente, las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la prisión preventiva de la libertad y el estado de la causa.

El Juez impondrá las correspondientes reglas de conducta necesaria para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida.

El imputado y el Ministerio Público podrán interponer recurso de apelación dentro del tercer día de notificado. La apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quién se dictó auto de cesación de la prisión preventiva (Art.284.1); la impugnación que se interponga contra el auto de cesación favorable, se concederá sin efectos suspensivos, garantizándose de esta forma la libertad del imputado. Rige en lo pertinente lo referente a la impugnación de la prisión preventiva establecido en el Art.278 numerales 1 y 2.

La cesación de la prisión preventiva será revocada si el imputado infringe las reglas de conducta o no comparece a las diligencias del proceso sin excusa suficiente o realice preparativos de fuga o cuando nuevas circunstancias exijan se dicte auto de prisión preventiva en su contra, así como perderá la caución, si la hubiera pagado. El hecho de que el imputado haya cobrado su libertad no lo exime de seguir cumpliendo los

mandatos jurisdiccionales y de comparecer a la instancia cuantas veces sea requerido.

2.3.- DIFERENCIAS CON DETENCION.

La detención a nivel policial y judicial de un individuo, supone una grave afectación a la libertad personal impidiendo su capacidad de locomoción y su desplazamiento de un lugar a otro; importa una injerencia directa a la esfera de la libertad de un ciudadano, por parte de los órganos de persecución penal.

El Código de Procedimientos Penales no recogía taxativamente esta institución procesal, el Código Procesal penal de 1991 respecto a su articulación vigente solo hace mención a la detención preventiva, cuya naturaleza se asimila a la “prisión preventiva” que prevé el nuevo Código Procesal Penal del año 2004 y que además este cuerpo legislativo hace una clara diferencia entre la detención (policial, arresto ciudadano y preliminar judicial) y la prisión preventiva como medidas coercitivas del proceso penal..

La detención se diferencia de la prisión preventiva tanto por su duración, como por su finalidad en el marco de la persecución penal estatal, la detención es una medida de coerción penal que se adopta ni bien se inician los primeros actos de investigación, cuya finalidad esencial es viabilizar las diligencias que se orientan al recojo y acopio de pruebas; debe entenderse por detención toda privación de la libertad de

movimientos que no consista en la ejecución de una pena o en el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preliminar adoptada en el marco de un proceso penal abierto o por abrir. (PEÑA CABRERA A., 2007)

La prisión preventiva a diferencia de la detención propiamente dicha, goza de una mayor aplicabilidad y vigencia, en razón de sus efectos más duraderos en el tiempo y de su legitimidad por emanar fundamentalmente de una resolución de orden jurisdiccional.

2.3.1.- Características del mandato de detención.

- a) Se dicta en delitos dolosos y culposos.
- b) Tiene el carácter de facultativa.
- c) Existencia de Resolución Fundamentada.
- d) Que concurren los tres presupuestos materiales para dictar detención

2.4.- NATURALEZA Y FINALIDAD DE LA PRISION PREVENTIVA. -

La prisión preventiva es una medida de naturaleza cautelar personal, que la hace provisional, es decir variable, según las condiciones que se presenten; y, que si se solicita y acuerda, debe suceder, solo cuando sea absolutamente indispensable, y por un tiempo estrictamente necesario y razonable.¹

2.4.1. Fumus delicti comissi.

El primero de los presupuestos que debe ser tomado en cuenta para el dictado de la prisión preventiva, es el fumus delicti comissi,

equiparable con el *fumus boni iuris* exigible en el Derecho civil, y se halla establecido en artículo 268, numeral 1, literal a) del Código Procesal Penal del 2004 el cual se refiere a la presencia de elementos de convicción, indicativos de que la persona a la cual se le imputa la comisión de un delito, pueda tenersele, razonablemente, como autora o partícipe del ilícito penal.

Constituye el primer presupuesto a analizar, por un cuestión lógica, pues antes de discutir si de alguna forma se limitarán los derechos del imputado, primero debe existir una expectativa razonable o muy probable de que el proceso penal se realizará, ya que solo en ese supuesto hay una expectativa a proteger; luego si al inicio de un proceso penal se necesita de indicios o elementos de juicio reveladores de la existencia de un ilícito penal para abrir procesamiento a una persona, también se necesitará de una información vinculatoria suficiente para dictar alguna medida coercitiva, entonces no se puede aplicar la prisión preventiva sino existe un mínimo de información que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la existencia del hecho y de la intervención del imputado en él. Sanción penal superior a 4 años

Otro presupuesto que debe presentarse de manera concurrente, es que la probable sanción a imponer al imputado –tal como prescribe el

artículo 268, apartado 1, literal b) del CPP de 2004- “sea superior a cuatro años de pena privativa de la libertad”.

La aplicación de un límite penológico de cuatro años para imponer la prisión preventiva, es un requisito que, entendido en su real dimensión, importa un presupuesto indispensable para dotar a la prisión preventiva de una lógica proporcional. Es cierto que una utilización automática y aislada de dicho requisito pervierte el sistema procesal y convierte a la prisión preventiva en un anticipo de la pena, que es un efecto no deseado con su regulación. Pero también es cierto que si los cuatro años de pena privativa de libertad constituyen el límite para aplicar una pena de ejecución suspendida condicionalmente (artículo 57.1 CP), entonces es necesario establecer un criterio que más que permitir, impida aplicar la medida en los casos que la pena no supere dicho límite. Este criterio no imprime otra lógica que no sea la de considerar abiertamente desproporcionada la utilización de una medida limitativa, que pueda infligir un daño mayor que el que pueda esperarse de la pena a imponer en la sentencia condenatoria.

2.4.2. Periculum in mora.

El presupuesto más importante para la imposición de la prisión preventiva, es el periculum in mora (peligro procesal), que abarca tanto el peligro de fuga como el peligro de obstaculización de la

investigación. La ausencia de estos riesgos determina que no pueda dictarse mandato de detención, aunque subsistan los otros presupuestos ya aludidos en el presente trabajo.

En este sentido el TC ha tenido oportunidad de señalar que: “La única manera de determinar si la detención judicial preventiva de un individuo no responde a una decisión arbitraria del juez, es observar o analizar determinados elementos objetivos que permitan concluir que, más allá de los indicios o medios probatorios que vinculan razonablemente al inculpado con la comisión del hecho delictivo y del quantum de la eventual pena a imponerse, existe peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. La existencia de estos dos últimos riesgos es lo que la doctrina denomina peligro procesal.

La pertenencia a una organización delictiva El legislador, en el numeral 2 del artículo 268º, introduce la posibilidad de dictar mandato de prisión preventiva cuando existan elementos de convicción acerca de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su reintegración a la misma, pero solo cuando se demuestre que pueda utilizar los medios que ella le brinde para facilitar su fuga o la de otros imputados, o para obstaculizar la averiguación de la verdad.

Acerca de este requisito en el considerando noveno de la circular se señala lo siguiente:

- Sin duda la pertenencia del imputado a una organización delictiva o su integración a la misma, no es en estricto sentido un presupuesto material propio. No es una *conditio sine qua non* para la aplicación de la prisión preventiva, que es lo que ocurre en los demás presupuestos materiales. La pertenencia a una organización delictiva, a la que por su propio contenido común debe comprenderse el concepto de banda, es en realidad un criterio, de especial característica y taxativa relevancia jurídica procesal, para valorar el peligro de fuga e, incluso, el peligro de obstaculización.
- En línea con la jurisprudencia alemana la prisión preventiva en estos casos sólo puede ser impuesta si existen los motivos de fuga o peligro de entorpecimiento. No obstante, ello, en la verificación de su existencia no se debe ser tan exigente, sino que ya es suficiente, en relación con la gravedad del hecho atribuido, una intensidad menor de peligro de fuga o de entorpecimiento. En estos casos se entiende que está minimizado el arraigo social del imputado.
- Nos parece que aquí otra vez se presume el peligro procesal, basándose en la gravedad de pena y la pertenencia a una organización delictiva, lo cual como ya hemos explicado no es legítimo presumir el peligro procesal, sino que debe basarse en datos ciertos del caso en concreto. Sin duda es cierto, según la experiencia, que en varios casos los imputados se sustraen del proceso penal ayudados por dicha

organización, sin embargo, creemos que, en todos los casos, sin excepción, debe valorarse un mínimo de datos objetivos que permitan colegir el peligro procesal en el caso en concreto derivados de la pertenencia del imputado a una organización delictiva o banda. Además, puede presentarse el caso de que, atendiendo a las primeras investigaciones, el imputado pertenezca a una organización delictiva, pero de esas mismas investigaciones se deduce que no puede existir peligro procesal, entonces no se puede imponer la prisión preventiva.

2.5.- LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL NCPP:

2.5.1.- La Presunción de Inocencia en el NCPP.

La presunción de inocencia está reconocida en el artículo 2º, inciso 24, párrafo e) de la Constitución y en el artículo II del Título Preliminar del NCPP que establecen que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.²

Con el amplio paraguas de protección que el denominado principio de presunción de inocencia tiene, la prisión preventiva no puede ser utilizada como una pena anticipada, pues se estaría violando este principio y la Constitución misma.

En el nuevo sistema procesal se garantiza la presunción de inocencia a través de diversos mecanismos. En el caso de la prisión preventiva, la

presunción de inocencia se resguarda a través de la audiencia previa pública, en escenario en el que el juez decidirá la aplicación o no de la medida. La imparcialidad del Juez se garantiza con la separación de roles, en donde ya no está contaminado con los perjuicios de la investigación, pues ya no tiene la carga de la prueba. Además, la decisión del Juez se toma previo argumento del Fiscal y previo conocimiento de lo alegado en debate por las partes, y ya no de oficio como se acostumbraba con el anterior código.

Como dice **Burgos Mariño**, esta nueva regulación permite garantizar mejor la presunción de inocencia, pues ya no “se detendrá primero, para luego investigar”, sino que ahora el nuevo modelo exige que “primero se investigará para luego detener”. Efectivamente, esto constituye un cambio radical en las prácticas procesales vinculadas a la prisión preventiva, lo que sin duda alguna, repercute en la mayor protección de la presunción de inocencia.³

Además, el reconocimiento del principio de presunción de inocencia en nuestro nuevo sistema procesal penal, no impide que se regulen las medidas de coerción necesarias para garantizar los fines del proceso. Claro está, siempre y cuando no se trate al condenado como culpable antes de la sentencia final condenatoria.

2.5.2.-Finalidad de la Prisión Preventiva.

La prisión preventiva tiene como **finalidad** instrumental la realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva; pues en ningún caso tendrá, la finalidad de garantizar la ejecución de una futura condena.

Por ello, la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del Derecho penal material, no puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino una finalidad de carácter procesal; la sustracción del inculcado a la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de obstaculización de la investigación.

De esta manera, la Circular sobre Prisión Preventiva, emitida por la Corte Suprema señala que: *“Ello es así porque la prisión preventiva no es otra cosa que una medida coercitiva personal, que solo puede tener fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal [consolidar, en suma, (i) el proceso de conocimiento (asegurando la presencia del imputado en el procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de la persecución penal) o (ii) la ejecución de la pena]”*

Efectivamente, la prisión preventiva no tiene como finalidad garantizar la ejecución de la futura condena. Ha sido lamentable que por mucho tiempo se hubiese considerado así, considerando indebidamente que la prisión

preventiva es una forma de castigo y que el imputado que era detenido era ya culpable del delito, causando así, una lesión a la presunción de inocencia. Sumándole a ello, la presión de la prensa, de la sociedad y, hasta la presión política, lo que hacía que la prisión preventiva sea una medida cautelar desnaturalizada.

Para ASECIO MELLADO, “la prisión preventiva, si bien teóricamente supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, no lo es menos que deviene necesaria en la medida en que resulta ineludible para garantizar el proceso penal”.

Así también, *Urquiza Olachea*, afirma que no existe la incompatibilidad entre el principio de inocencia y medios de coerción personal, es decir “la coerción procesal tiene su fundamento no en la consideración del sujeto como responsable del hecho criminal antes de una sentencia condenatoria firme, sino en la necesidad de garantizar el logro de los fines del proceso”.

En tal sentido, la prisión preventiva no debe ser la regla, su aplicación como medida cautelar en aras de asegurar el adecuado curso de las investigaciones y la plena ejecutabilidad de una eventual sentencia condenatoria, **debe ser la última ratio por la que puede optar un juez para asegurar el éxito del proceso penal**. Es decir, solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso para garantizar el proceso penal.

Por ello, su dictado presupone que el juez penal haya evaluado; a la luz de las particulares circunstancias de cada caso, y, descartado, la posibilidad de dictar una medida menos restrictiva de la libertad personal. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha establecido que: “La prisión preventiva tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso. No se trata de una medida punitiva, por lo que, mediante ella, no se adelanta opinión respecto a la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de acusación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. Se trata de una medida cautelar, cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional”

2.5.3.-La prisión preventiva ¿regla o excepción?

La excepcionalidad de las medidas cautelares es uno de los principios que resulta de mayor exigencia cuando hablamos de encarcelamiento preventivo.

Sin embargo, el principio no opera, en la práctica, como mecanismo protector de la libertad y del principio de inocencia, sino, como principio fundamental que regula toda la institución de la prisión preventiva. El Juez tiene la potestad de emitir resoluciones que restringen derechos fundamentales esenciales como la libertad ambulatoria por lo que debe tener presente este principio. La prisión preventiva se debe ordenar solo en el caso que sea absolutamente necesario para hacer frente al alto

riesgo procesal. Se debe evitar que la prisión preventiva sea usada como castigo y considerarla una pena anticipada.

La aplicación de la prisión preventiva será excepcional, siempre que no sea viable una medida cautelar menos gravosa, como la comparecencia con restricciones o la detención domiciliaria- quedando el Juez autorizado a dictar esta medida cuando el caso sea de absoluta necesidad.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 9º numeral 3, expresa la excepcionalidad de la prisión preventiva: “(…)

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

Asimismo, la doctrina de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, establece: “que la prisión preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos o destruir evidencias”

En nuestro sistema procesal, el Juez tiene una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, como por ejemplo, la detención domiciliaria, la

comparecencia simple o restringida del país, la caución, el impedimento de salida.

2.6.-PRONUNCIAMIENTO DE LA CIDH SOBRE EL MAL USO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. -

La comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su preocupación por el uso desmedido e irregular de la Prisión Preventiva en el Perú, se revela que en nuestro país existen cerca de 40,000 personas en Prisión Preventiva. Asimismo, critica el incremento en la duración de Prisión Preventiva en los casos de delitos de Corrupción de Funcionarios y de Criminalidad Organizada, así como el escaso número de Defensores Públicos que puedan atender a la población de los procesos inmediatos, de flagrancia. En América Latina el promedio de personas en Prisión Preventiva es de 36%.³ del total de la población penitenciaria, pero en algunos países supera el 60%. En el Perú en el año 2013 se tenían 36, 670, personas en Prisión Preventiva, habiéndose incrementado en el 2015 a un total de 39,439 personas, en el año 2016 a 41,350 personas y en el año 2017 a 43,780 personas. De esta manera es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, informa respecto al uso y abuso de la Prisión Preventiva, considerándolo como un problema Crónico y que su desmedido uso, es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los

Estados Americanos (OEA), ello en cuanto al respeto y garantía de los Derechos de las personas privadas de Libertad.

CAPÍTULO III

3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

3.1. ANALISIS

3.1.1. CUADRO ESTADISTICO DE REQUERIMIENTOS DE PRISION PREVENTIVA DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE.

CUADRO N° 01

Fiscal	Requerimientos	Fundadas	Infundadas	En Proceso
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LAMBAYEQUE				
BAIQUE SANCHEZ BIANCA	26	12	0	14
BARDALES FLORES,YULISSA RAQUEL	37	32	3	02
BUSTAMANTE DELGADO WILMER ORLANDO	36	29	1	6
GARCIA PUICON MILAGROS	14	11	0	3
PORTALATINO SEGURA RODOLFO	10	10	0	0
SAAVEDRA BALAREZO ROSA INES	09	4	0	5
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MOTUPE				
CORONADO ZULOETA KARINA DEL CARMEN	14	9	1	4
DIAZ VARGAS ANGELA DEL ROSARIO	4	4	0	0
GUERRERO SAAVEDRA JOSÉ ALBERTO	1	4	0	0
VARGAS UGAZ PAVEL CESAR	20	2	3	15
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CHICLAYO				
ALVARADO CABRERA SARA DEL SOCORRO	19	16	3	0
BANCES ZARATE SCARLETT	1	0	1	0
BRAVO VIGO TANIA	44	31	12	1
CACERES ALEJOS CARLOS GUSTAVO	30	25	4	1
CASAS CHUSO MIGUEL ANGEL	17	11	1	5
CHICLAYO TELLO JORGE JOEL	11	8	3	0
CONTRERAS TAPIA LOURDES	13	10	0	3
CORREA FLORES CAROLINA RAQUEL	3	2	0	1
GALARCEP SOLIS JANET OLENKA	11	8	1	2
GUERRERO SAAVEDRA DAVID RICARDO	11	6	3	2
HIDALGO RODRIGUEZ DORA	5	4	0	1
LARREA WONG MARIA ANTONIETA	16	10	2	4
LOPEZ LOPEZ PEDRO LEONEL	17	3	0	14
MEDINA LUCANO MAXIMO	11	7	2	2
OSORES PADILLA CARLOS ENRIQUE	27	17	5	5
PADILLA TENORIO KAREN RUTH	3	3	0	0
PAZOS PINEDO GLENDY	7	6	1	0
PEREZ VASQUEZ SEGUNDO EDILBERTO	14	9	0	5
POZO TARRILLO CYNTHIA LIZETH	14	11	3	0
TICONA PARI CARLOS NAPOLEON	13	10	2	1
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE CUTERVO				

HERRERA RIOS CHRISTIAM EDUARDO	25	20	1	4
MONJA YTURREGUI SUSANA MARCELA	18	9	3	6
SAAVEDRA GOMEZ DANIEL FERNANDO	22	13	1	8
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE Ferreñafe				
CABELLERO VELEZMORO DAVID WILBER	28	6	1	21
ROMERO FERNANDEZ VIOLETA SOLEDAD	5	5	0	0
SALAVARRIA CASTILLO JENNIFER	4	1	0	3
VALDIVIEZO LUDEÑA ISABEL	4	2	0	2
VASQUEZ LLANOS ANALY FATIMA	19	2	13	4
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE JAEN				
BRAVO DAVILA NEY ELIZABETH	5	0	0	5
CABRERA HERRERA LUIS ALBERTO	17	5	0	12
CARO MELENDEZ EMPERATRIZ	27	7	20	0
DIAZ REYES DIANA VANESSA	1	0	0	1
FALLA SALAZAR ROSA STANY	43	26	2	15
MOGOLLON CASTILLO JUAN FRANCISCO	42	27	3	12
MUÑOZ CESPEDES ROSS MERY	7	5	0	2
SANTACRUZ SAMAME JENNER ANTHONY	19	15	2	2

ANALISIS:

Conforme la estadística proporcionada por el área de estadística del Distrito Fiscal de Lambayeque, se puede comprobar que efectivamente de las tres Fiscalías Provinciales Penales de Chiclayo, los Fiscales solicitan en su totalidad realizan requerimientos de Prisión Preventiva, siendo declaradas Fundadas casi todas por los Jueces Penales, acreditando nuestra hipótesis, ello en cuanto al hacinamiento carcelario al declarar fundado los requerimientos solicitados.

3.1.2. POBLACION PENAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHICLAYO-EX PICSÍ.

POBLACIÓN PENAL POR SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO

La información que se presenta ha sido obtenida del mismo establecimiento ex **PENAL PICSÍ**, por lo tanto, es objetiva y actual. Pero al respecto se debe tener presente que, nunca el número de internos es permanente, pues, todos los días ingresan y salen de la misma.

CUADRO N° 02

PROCESADOS CON PRISION PREVENTIVA		
Hombres	Mujeres	Total
430	25	455

GRAFICO N° 02



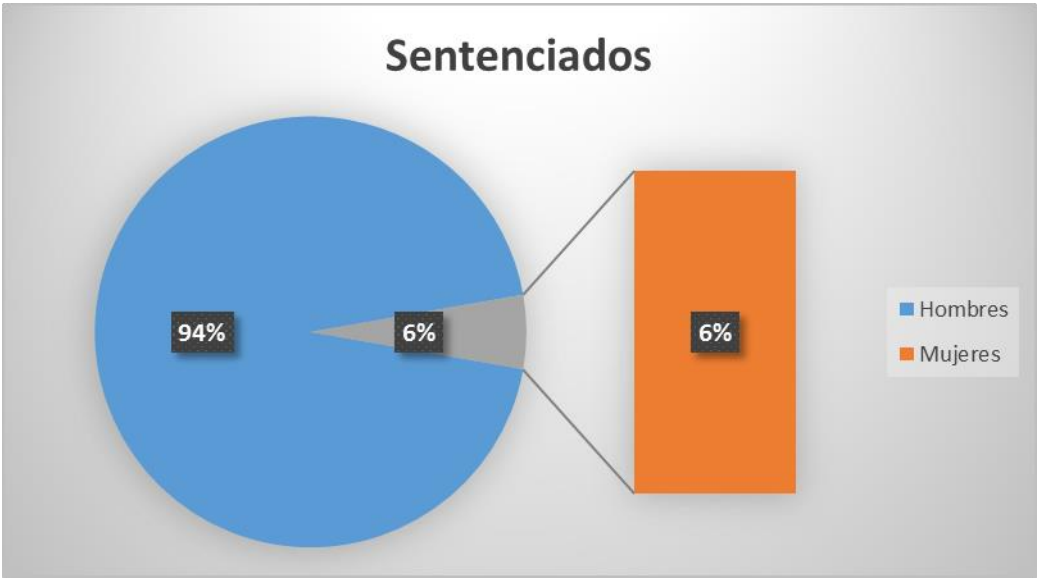
En este cuadro se muestra el número total de internos procesados según el género de la persona. Así, se tiene que, a la fecha de la indagación de los datos, existían un total de 430 internos varones en condición de procesados, es

decir con prisión preventiva. En cambio, en esta misma situación existían 25 mujeres, haciendo un total de 455 personas. Este grafico nos indica que mayoritariamente son del género masculino los internos en situación de procesados.

CUADRO N° 03

SENTENCIADOS		
Hombres	Mujeres	Total
205	12	217

GRAFICO N° 03



En este cuadro se percibe casi la misma tendencia que el cuadro anterior, pues, aparece que, el número de internos condenados del género masculino son 205,

en cambio del género femenino son tan solamente 12 internas. Sumados hacen un total de 217.

3.1.3. RELACION DE RESOLUCIONES ENTRE LOS AÑOS 2016-2017, QUE DECLARAN FUNDADAS LAS PRISIONES PREVENTIVAS POR PARTE DE LOS JUECES PENALES DEL LOS JUZGADOS DE INVESTIGACION PREPARATORIA- CHICLAYO.

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA PENAL - CHICLAYO	N° EXPEDIENTE	FECHA RESOLUCION	Prisión Preventiva
1 ^{er} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	03467-2015-86	08 FEBRERO 2016	Fundada
7 ^{mo} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	02103-2016-26	16 MARZO 2016	Fundada
5 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	3572-2016-1706	02 JNUIO 2016	Fundada
2 ^{DO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	05690-2016-0-1706	22 JULIO 2016	Fundada
7 ^{MO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	05121-2016-99-1706	04 JULIO 2016	Fundada
7 ^{MO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	029-2015-38-1706	08 JULIO 2016	Fundada
6 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	08455-2015-9-1706	18 SETIEMBRE 2016	Fundada
6 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	09068-2016-14-1706	11 OCTUBRE 2016	Fundada
7 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	00610-2017-51-1706	11 MARZO 2017	Fundada
7 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	03937-2017-61-1706	04 MAYO 2017	Fundada
7 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	04042-2017-5-1706	07 MAYO 2017	Fundada
7 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	05183-2017-51-1706	13 JUNIO 2017	Fundada
5 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	05792-2016-7-1706	22 JUNIO 2017	Fundada
5 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	05245-2017-27-1706	25 JUNIO 2017	Fundada
4 ^{TO} JUZG.INVEST.PREPARATORIA	09769-2017-47-1706	18 OCTUBRE 2017	Fundada

ANALISIS:

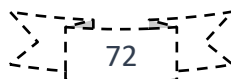
Del cuadro de resoluciones judiciales recopilados de los diez Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo; se comprueba que efectivamente en su mayoría las prisiones preventivas solicitadas por los fiscales, son declarados

fundados por el Jueces Penales; asimismo al evaluar los índices de aplicación de prisión preventiva en los juzgados penales de la provincia de Chiclayo, se está demostrando el abuso de la aplicación de prisión preventiva, lo que contribuye al incremento del hacinamiento de internos en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, demostrando que existe carencia de criterio, en los Magistrados al momento de solicitar y aplicar la prisión preventiva.

3.1.4. ENCUESTA REALIZADO A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE CHICLAYO

GRAFICO N° 01

Pregunta 01:



¿Considera el Juez más el requerimiento del Fiscal que la tesis de la defensa?

Escala Valorativa	Ni		Fi
	SI	40	89 %
	NO	5	11 %
	TOTAL	45	100 %

En este ITEM analizado el 89% opina que la prisión preventiva es dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Chiclayo considerando el requerimiento del fiscal y el 11% opina que se basa en tesis de la defensa.



GRAFICO N° 02

Pregunta N° 02:

¿Considera usted si se valora correctamente el arraigo del imputado?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	45	100 %
	NO	0	0 %
	TOTAL	45	100%

En el grafico Finalizado se advierte que el 100% de fiscales considera que los Jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria consideran para dictar prisión preventiva el arraigo del imputado.

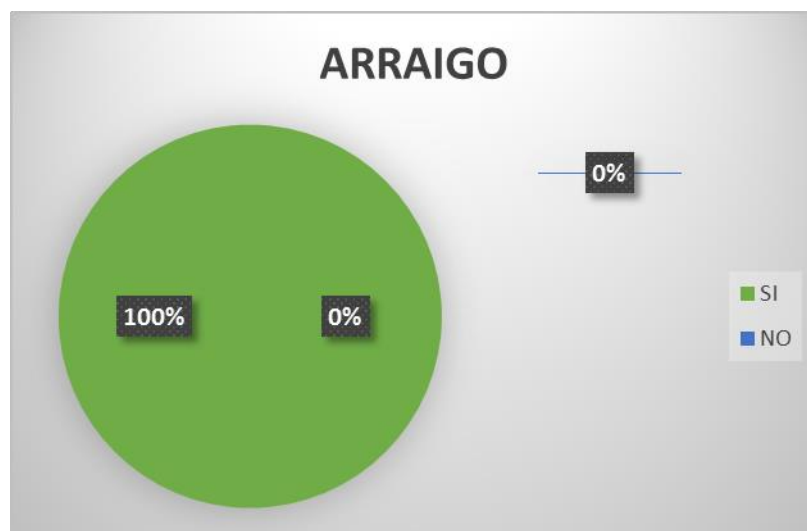


GRAFICO N° 03

Pregunta N° 03:

¿Es importante para la aplicación de la pena la materia probatoria?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	25	56%
	NO	20	44%
	TOTAL	45	100%

En este grafico detallado se aprecia que el 44% alude que para determinar prisión preventiva basta la materia probatoria y el 56% opina que basta el hecho delictuoso cometido en flagrancia.

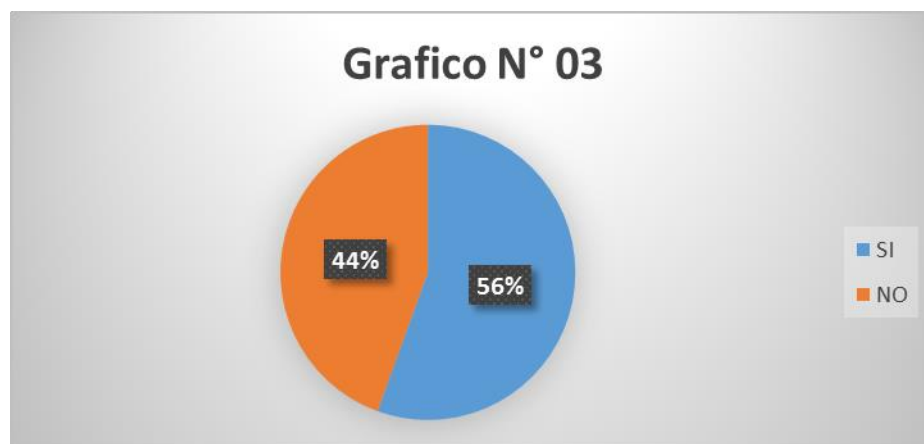


GRAFICO N° 04

Pregunta N° 04:

¿Considera usted que para la aplicación de la prisión preventiva se valora el comportamiento del imputado?

75

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	40	89%
	NO	5	11%
	TOTAL	45	100%

En el grafico observado en que el 89 % considera que el Magistrado valora el comportamiento del imputado si es residente habitual y el 11 % considera que el a quien no valora por criterio de rehabilitación de pena cumplida.

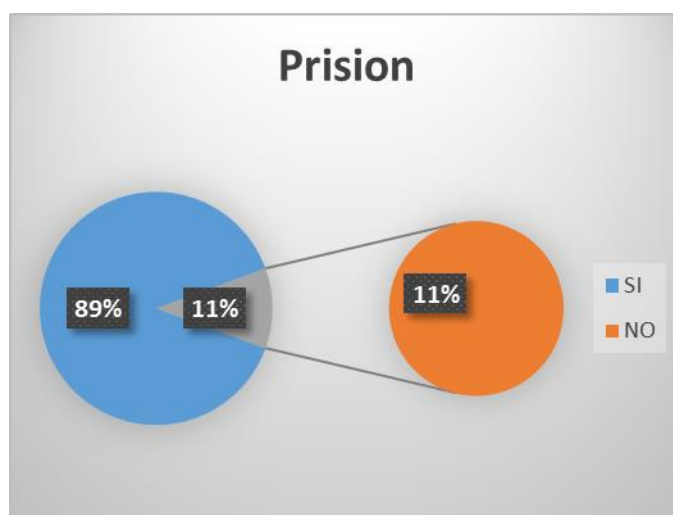


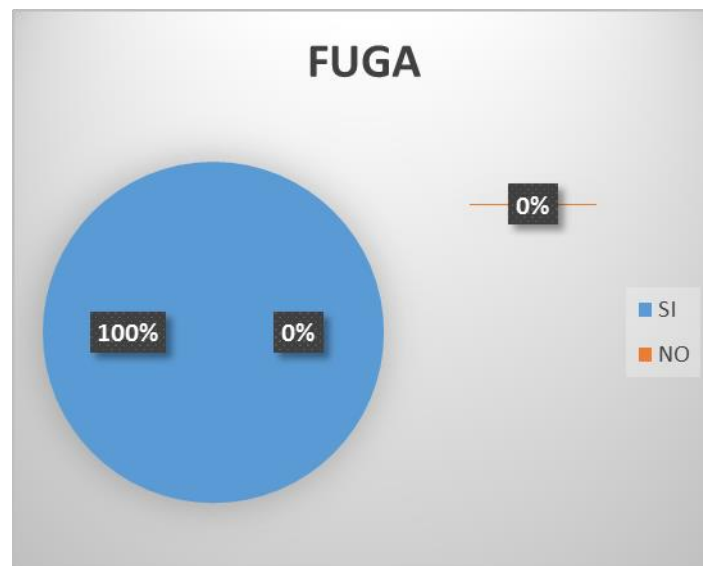
GRAFICO N° 05

Pregunta N° 05:

¿El peligro de fuga se acredita fehacientemente en la aplicación de prisión preventiva?

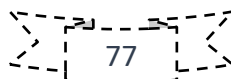
ESCALA VALORATIVA		Ni	FI
	SI	45	100%
	NO	0	0%
	TOTAL	45	100%

Los resultados de esta pregunta nos indica que el 100 % de los requerimientos de prisión preventiva contienen fundamentos de peligro de fuga.



3.1.5. ENCUESTAS REALIZADOS A AGENTES PENITENCIARIOS INPE – CHICLAYO

GRAFICO N° 01



Pregunta N° 01:

¿La prisión preventiva debe dictarse de manera excepcional?

ESCALA VALORATIVO		Ni	Fi
	SI	8	80 %
	NO	2	20 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos mostrados se tiene el 80% de los encuestados, si están de acuerdo que la prisión preventiva se dicte de manera excepcional y el 20% NO, el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.



GRAFICO N° 02

Pregunta N° 02:

78

¿En el dictado de la prisión preventiva se tiene en consideración el arraigo del imputado?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	3	30%
	NO	7	70 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos revelados se tiene que el 30% de los encuestados.SI menciona que en el dictado de la prisión preventiva los jueces toman en consideración el arraigo del imputado y el 70%, NO, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.

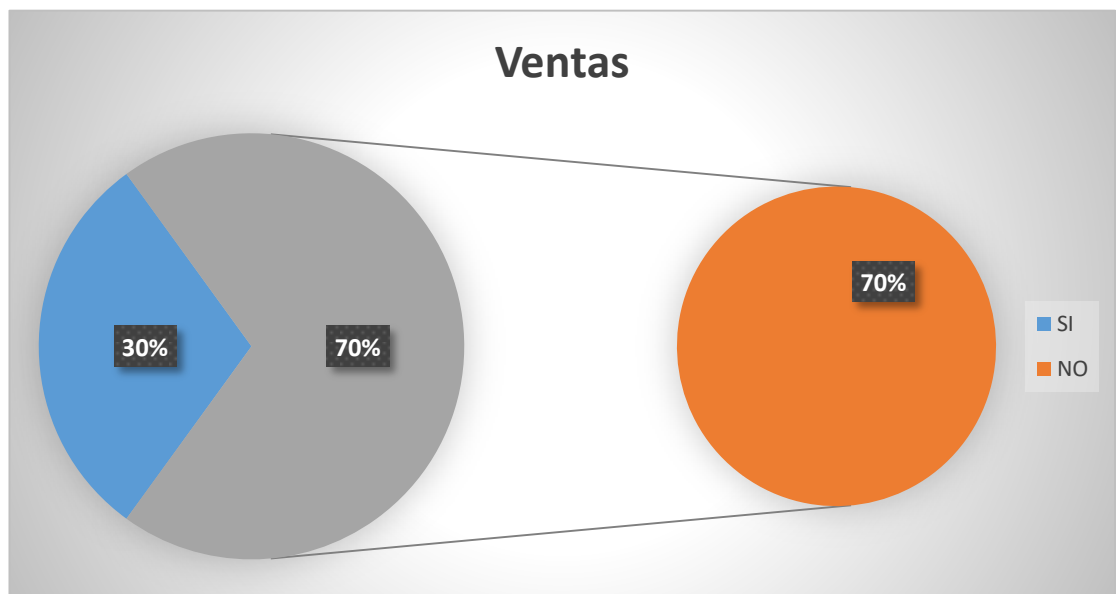


GRAFICO N° 03

Pregunta N° 03:

¿Se hace uso exagerado del instrumento de la prisión preventiva como control formal del estado?

ESCALAS VALORATIVAS		Ni	Fi
	SI	10	100 %
	NO	0	0 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos manifestados se tiene que 100% de los encuestados, menciona que, SI se hace uso exagerado del instrumento de la prisión preventiva como control formal del estado, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.

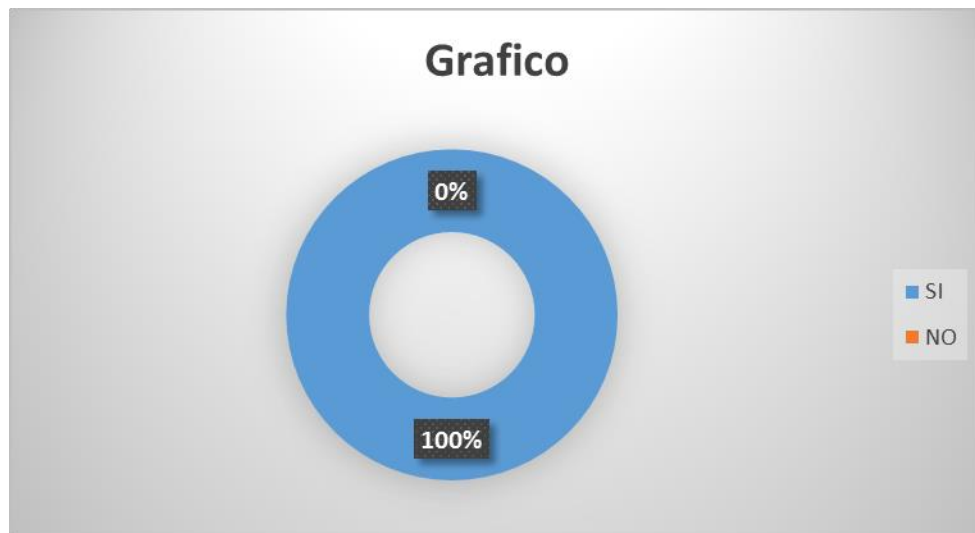


GRAFICO N° 04

Pregunta N° 04:

80

¿Usted cree que la Prisión preventiva está siendo aplicada correctamente por los Jueces de la investigación preparatoria en Chiclayo?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	1	10 %
	NO	9	90 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos mostrados, se tiene que el 10% de los encuestados, menciona que SI la prisión preventiva está siendo aplicada correctamente por los Jueces de investigación preparatoria y el 90% No.



GRAFICO N° 05

Pregunta N° 05:

¿En la imposición de la prisión preventiva, ésta se cumple con la finalidad para la cual fue establecida?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	2	20 %
	NO	8	80 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos expuestos, se tiene que el 20 % de los encuestados, menciona que SI en la imposición de la prisión preventiva por parte del juez, se cumple con la finalidad para la cual fue establecida, y el 80 % NO, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.

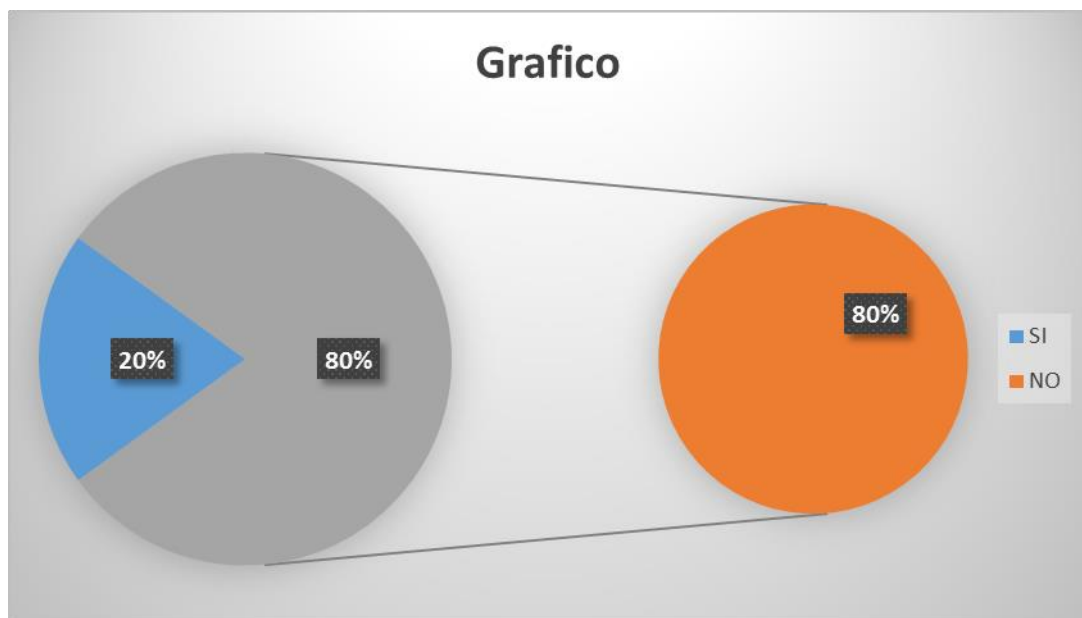


GRAFICO N°06

Pregunta N° 06:

¿El uso excesivo de Prisión preventiva no atenta contra la vulneración de la libertad personal?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	1	10%
	NO	9	90%
	TOTAL	10	100 %

En los datos descubiertos se tiene que 10 % de los encuestados, menciona que SI, y el 90 NO dado que, si vulnera el derecho de la Libertad protegido por la Constitución, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.



GRAFICO N° 07

Pregunta N° 07:

¿Usted cree que unos de los criterios que influyen en los Magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo se deba a la misma presión mediática?

ESCALA VALORATIVA		Ni	Fi
	SI	9	90 %
	NO	1	10 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos descubiertos se tiene que 90% de los encuestados menciona que SI, que los Magistrados se encuentran presionados por influencia mediática y el 10% NO.

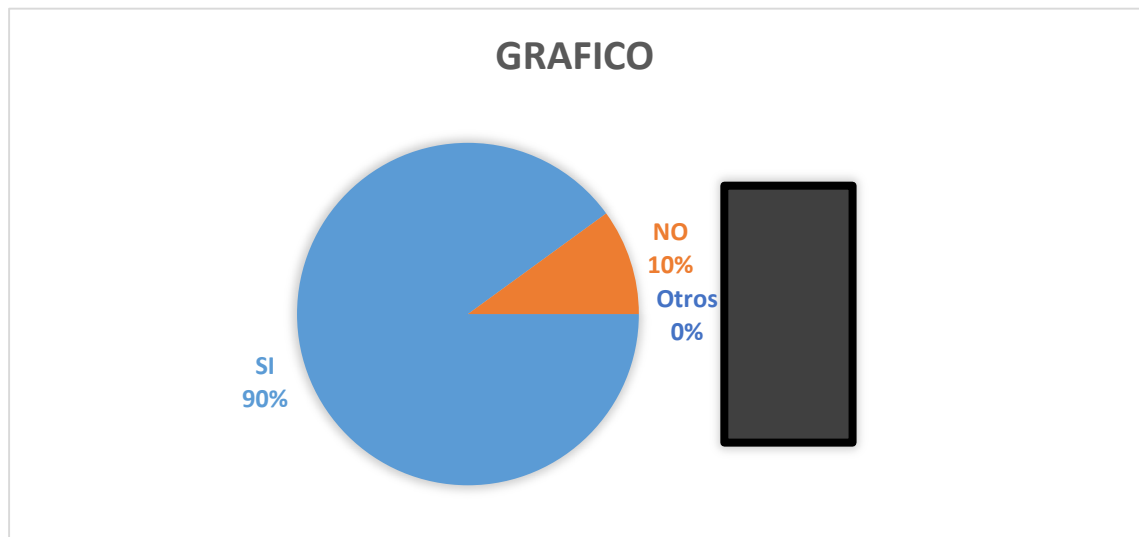


GRAFICO N° 08

Pregunta N° 08:

¿Usted considera que no se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 268 del nuevo código procesal penal, respecto que el Juez Penal evalúe correctamente los presupuestos procesales antes de declarar fundada los requerimientos de prisión preventiva?

ESCALA VALORATORIA		Ni	Fi
	SI	8	80 %
	NO	2	20 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos descubiertos se tiene que 80 % de los encuestados, menciona que SI, y el 20 NO, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.

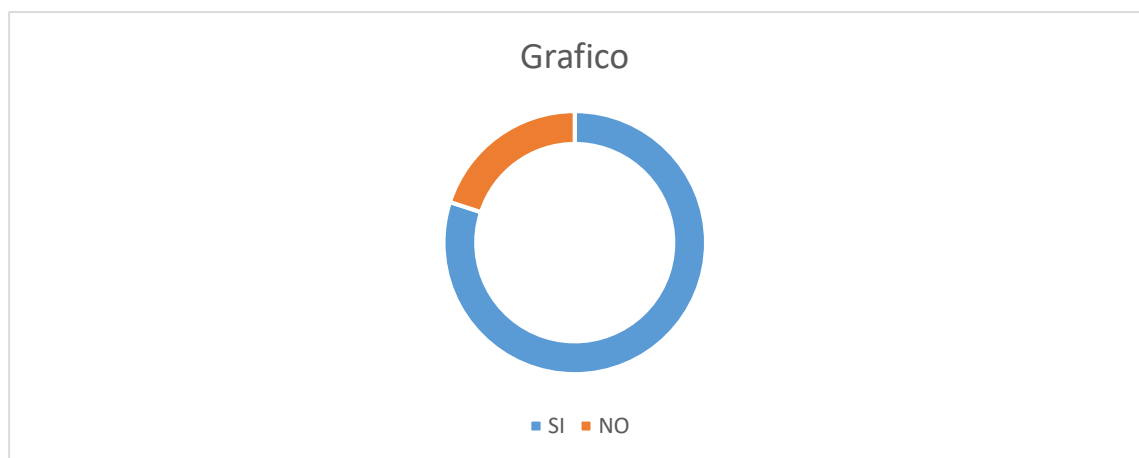


GRAFICO N° 09

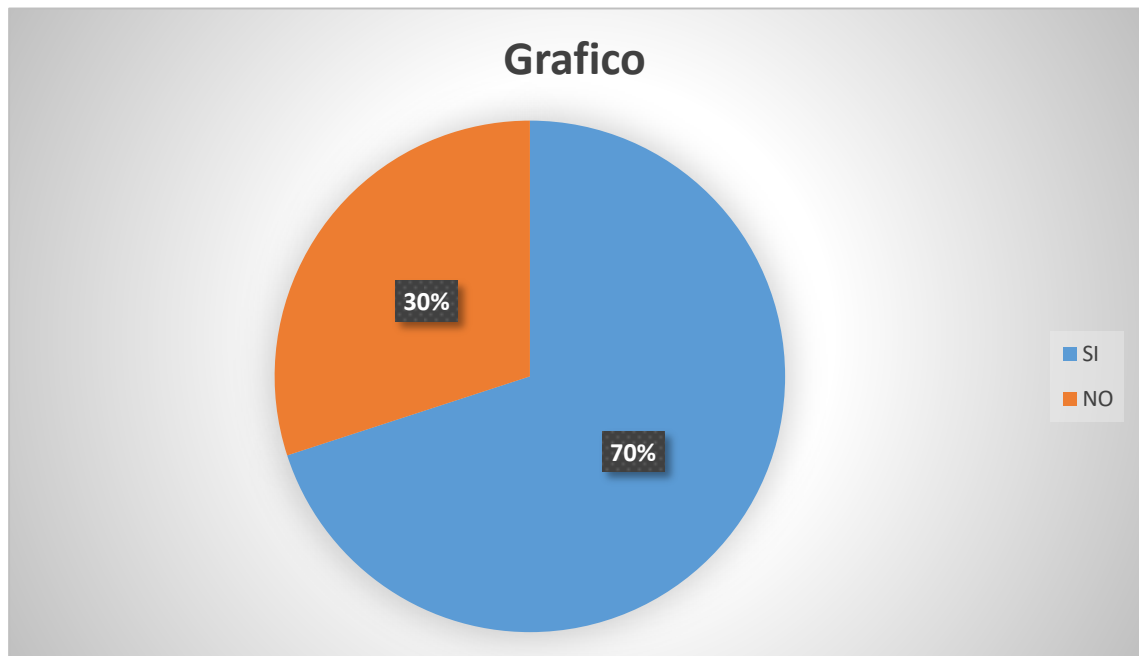
Pregunta N° 09



¿Usted considera que se estaría vulnerando la defensa del derecho a la libertad al declararse fundada la prisión preventiva?

ESCALA VALORATORIA		Ni	Fi
	SI	7	70 %
	NO	3	30 %
	TOTAL	10	100 %

En los datos descubiertos se tiene que 70 % de los encuestados, menciona que SI, y el 30 NO, en el grafico siguiente podemos apreciar los resultados.



3.2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEORICO:

La presente Tesis titulado *"La Aplicación Excesiva de la prisión Preventiva y sus Consecuencias Jurídicas en los Juzgados de Chiclayo"*, para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho, con Mención en Derecho Penal; trabajo a través del cual postulo un tema de relevante interés jurídico-social, por lo que La prisión Preventiva es una privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de precaución. Se toma esta medida con el fin de garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena. Se excluye, evidentemente, a aquellas personas privadas de libertad que se encuentran cumpliendo condena mediante sentencia firme, así como a las personas detenidas por motivos ajenos a la investigación y sanción de un delito por la vía penal.

Esta posición se basa en, **primero**, el artículo 2 del Título Preliminar del NCPP 2004, donde se lee que: "Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada". Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. **Segundo**, responde también al hecho de que, en el Perú, el proceso de apelación admite una revisión del caso tanto para cuestiones de hecho como de derecho, y se permite incluso la presentación de nuevas pruebas. A su vez el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), fuente de algunas de las cifras utilizadas en este trabajo, explicó que "un interno será

contabilizado como procesado hasta el momento en que tenga una sentencia firme consentida y ejecutoriada. Solo cuando el Poder Judicial diga que se acabó el proceso, pasa a sentenciado”. La prisión preventiva se sirve de tres objetivos: **i)** Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal, **ii)** Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal y **iii)** Pretende asegurar la ejecución penal. Con la presente investigación lo que se pretende hacer ver es el gran hacinamiento carcelario que se presente en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo- Ex picso, debido a que, entre enero del 2016 a diciembre del 2017, la mayor parte de los internos tienen la condición procesados más no de sentencias y eso debido a la aplicación de Prisiones Preventivas.

CONCLUSIONES

1.- La Prisión Preventiva constituye una medida cautelar de carácter personal, teniendo como finalidad acorde con su naturaleza, garantizar el proceso en sus fines característicos y el cumplimiento de la futura y eventual pena que pudiera imponerse.

2.- El acelerado crecimiento de la población penal se da por muchos factores que se podrían manejar de mejor manera, el abuso del mandato de prisión preventiva, es decir, personas que pese a que se debería tener la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal a la espera de su juicio, ello trae mayor incidencia en la sobrepoblación carcelaria.

3.- En el Perú el 60% de la población Penitenciaria se encuentra recluida en prisión preventiva, según datos del propio INPE, de un promedio de 10 mil reos que salen de la cárcel por diversos motivos, siendo así la prisión preventiva se dio de manera apresurada emanando gastos del Estado, contribuyendo al hacinamiento y se afectó los derechos de la persona y de su familia.

4.- Que conforme a las encuestas realizadas se ha visto que la mayor cantidad de Jueces Penales del Distrito Judicial de Lambayeque, declaran fundadas las prisiones preventivas más por una cuestión mediata que por análisis jurídico, dado que se sienten influencias por medios de comunicación, influencias políticas y la corrupción que destruye su independencia.

5.- De acuerdo del análisis documental en base a las resoluciones recopiladas de los juzgados de investigación preparatoria de Chiclayo, se llegó a la conclusión que los magistrados no califican de manera correcta el peligro de

fuga en la aplicación de la Prisión Preventiva, vulnerando el derecho de presunción de inocencia de los procesados.

RECOMENDACIONES



1.- De acuerdo a los estándares internacionales, la política penitenciaria del país debe ser parte de una política criminal global, enfocada primordialmente en prevención delictiva, entre ellos el rol de Poder Judicial es importante en cuanto se refiere a la calificación de los presuntos autores de un delito.

2.- Es necesario y fundamental contar con un plan coherente, sostenido con metas claras y mensurables, para lograr una reforma penitenciaria seria y profunda, como lo requiere la actual crisis que encara nuestro sistema penitenciario.

3.- Se recomienda no hacer un abuso excesivo del mandato de Prisión Preventiva, toda vez que algunas personas a quienes se les debería considerar la presunción de inocencia, han sido enviadas a un penal a la espera de su juicio.

4.- Se sugiere que los Fiscales que piden la prisión preventiva y los jueces que la conceden por presión mediática, por miedo al control disciplinario o porque el imputado no tiene una buena defensa. Deberían hacer conciencia hasta qué grado contribuyen hacer parte de la solución y no ser parte del problema actual del hacinamiento de cárceles con más presos sin sentencia.

5.- Establecer políticas criminales destinadas a regular el uso de la medida judicial de Prisión Preventiva que coadyuven a la reducción del porcentaje de presos preventivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ANDRÉS, P. (1996). Presunción de inocencia y prisión sin condena. Madrid: Cuadernos de Derecho Judicial N°XVIII. CGPJ.

- ASCENCIO, J. (2005) La regulación de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú. Lima: Palestra.
- BERISTAÍN, A. (1980). El proyecto de Código Penal de 1980, víctima de las estructuras. Santiago de Compostela: Aranzadi.
- BOROWSKI, M. (2003). La estructura de los derechos fundamentales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- BURGOS, V. (2005). Principios rectores del nuevo Código Procesal Penal. Lima: Palestra.
- BURGOS, V. (2007) La Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en la Ciudad de Trujillo y sus Retos. Universidad de Friburgo: Anuario de Derecho Penal.
- CALAMANDREI, P. (2005). Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. Lima: ARA.
- CESANO, J. (2005) Cesación de la prisión preventiva en el nuevo proceso penal. .Lima: Palestra.
- CUBAS, V. (2004). El Nuevo Código Procesal: ¿Revolución Penal? Lima: Justicia Viva.
- DEL RÍO LABARTHE, G., “La prisión preventiva en el NCPP. Presupuestos, procedimiento y duración”, en Revista Actualidad Jurídica, GACETA JURÍDICA, Nº 160, Marzo 2007.
- DOMINGUEZ, Valentín. “Lecciones de Derecho Procesal Penal”, Madrid: Colex, 2003.

- GIMENO, V., Moreno, V. y Cortes, V. (2003). Lecciones de Derecho Procesal Penal. Madrid: Colex.
- GUTIÉRREZ, P. (2004). La prisión provisional. Navarra: Thompson Aranzadi.
- LARDIZÁBAL, M. (1782). Discurso sobre las penas, contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma. Madrid : Imprenta de Ibarra.
- MAVILA, R. (2005). El nuevo sistema procesal penal. Lima: Jurista Editores.
- MONROY, J. (2002). Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Lima: Comunidad.
- ORÉ, A. (2006). Las medidas cautelares personales en el proceso penal peruano. Justicia Constitucional, Año II, N° 3, Enero-julio, Lima.
- ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Editorial Alternativas, segunda edición, 1999.
- REYES, V. (2007). Las medidas de coerción procesal personal en el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Actualidad jurídica, N° 163. Lima: Gaceta Jurídica.
- REYNA, L. (2006). El proceso penal aplicado. Lima: Gaceta Jurídica.

- RODRÍGUEZ, L. (2006). El proceso penal aplicado. Lima: Gaceta Jurídica.
- ROXIN, C. (2000). Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana de
- CÓRDOVA, G. y Pastor, D. Buenos Aires: Editores del Puerto. San Martín, C. (2003). Derecho Procesal Penal. Lima: Griley.
- SANGUINÉ, O. (2003). Prisión Provisional y Derechos Fundamentales. Valencia: Tirant lo Blanch.
- SCHÖNBOHM, H. y Lösing, N. (1998). El proceso penal, principio acusatorio y oralidad en Alemania. Un nuevo sistema procesal penal en América Latina. Buenos Aires: Ciedla.
- TALAVERA, P. (2004). Comentarios al Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Grijley.

ANEXOS

ENCUESTA A LOS FISCALES DEL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE- CHICLAYO

I. INSTRUCCIONES:

Esta encuesta está diseñada para determinar: ¿Cuál es el criterio de los Jueces Penales que abusan de la aplicación de la Prisión Preventiva, realizando un

castigo anticipado que deberá de resolver la Sala Superior; situación que contribuye al incremento del hacinamiento de internos en los Establecimiento Penitenciarios?

1.- ¿Considera el Juez más el requerimiento del Fiscal que la tesis de la defensa?

- a) SI.
- b) NO.

2.- ¿Considera usted si se valora correctamente el arraigo del imputado?

- a) SI.
- b) NO.

3.- ¿Es importante para la aplicación de la pena la materia probatoria?

- a) SI.
- b) NO.

4.- ¿Considera usted que para la aplicación de la prisión preventiva se valora el comportamiento del imputado?

- a) SI.
- b) NO.

5.- ¿El peligro de fuga se acredita fehacientemente en la aplicación de prisión preventiva?

a) SI.

b) NO.

Gracias por su colaboración.

ENCUESTA A LOS AGENTES PENITENCIARIOS DEL PENAL DE CHICLAYO

I. INSTRUCCIONES:

Esta encuesta está diseñada para determinar: ¿Cuál es el criterio de los Jueces Penales que abusan de la aplicación de la Prisión Preventiva, realizando un

castigo anticipado que deberá de resolver la Sala Superior; situación que contribuye al incremento del hacinamiento de internos en los Establecimiento Penitenciarios?

1.- ¿La prisión preventiva debe dictarse de manera excepcional?

a) SI.

b) NO.

2.- ¿En el dictado de la prisión preventiva se tiene en consideración el arraigo del imputado?

a) SI.

b) NO.

3.- ¿Se hace uso exagerado del instrumento de la prisión preventiva como control formal del estado?

a) SI.

b) NO.

4.- ¿Usted cree que la Prisión preventiva está siendo aplicada correctamente por los Jueces de la investigación preparatoria en Chiclayo?

a) SI.

b) NO

5.- ¿En la imposición de la prisión preventiva, ésta se cumple con la finalidad para la cual fue establecida?

- a) SI.
- b) NO.

6.- ¿El uso excesivo de Prisión preventiva no atenta contra la vulneración de la libertad personal?

- a) SI.
- b) NO.

7.- ¿Usted cree que unos de los criterios que influyen en los Magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Chiclayo se deba a la misma presión mediática?

- a) SI.
- b) NO.

8.- ¿Usted considera que no se estaría cumpliendo con lo establecido en el artículo 268 del nuevo código procesal penal, respecto que el Juez Penal evalúe correctamente los presupuestos procesales antes de declarar fundada los requerimientos de prisión preventiva?

- a) SI.

b) NO.

9.- ¿Usted considera que se estaría vulnerando la defensa del derecho a la libertad al declararse fundada la prisión preventiva?

a) SI.

b) NO.

Gracias por su colaboración